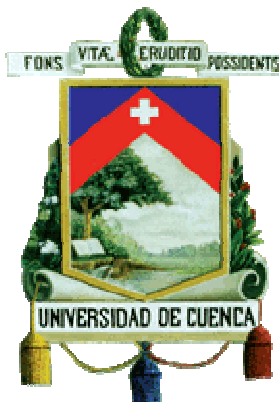


UNIVERSIDAD DE CUENCA



FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

ESCUELA DE DERECHO

**"RECURSO DE CASACION EN EL JUICIO EJECUTIVO: UNA
PERSPECTIVA QUE PROMUEVE SU PROCEDENCIA."**

Monografía previa a la obtención del Título de Abogada de los Tribunales
de Justicia de la República del Ecuador y Licenciada en Ciencias Políticas y
Sociales

Autor: Alejandro Sebastián Larriva Vélez

Director: Dr. Edgar Giovanni Sacasari Aucapiña

CUENCA – ECUADOR

Septiembre 2015



RESUMEN

En esta monografía se analiza el proceso del juicio ejecutivo, la diferencia que existe entre un proceso de conocimiento y un proceso de ejecución, la vinculación que existe entre el juicio ejecutivo y el título valor. Se trata sobre los medios de impugnación tanto los medios horizontales como verticales. Se analizan los antecedentes y características del Recurso de Casación, su procedencia y el marco legal que lo rige, y se propone una reforma en el Código de Procedimiento Civil en el que se establezca claramente que la casación procede en el juicio ejecutivo cuando las excepciones se refieren a los aspectos condicionales de la ejecución. Este ejercicio de reflexión jurídica pretende alimentar el debate sobre la aplicabilidad de la casación en los juicios ejecutivos, para que los administradores de justicia pongan especial atención en las excepciones al definir la admisibilidad, y así evitar arbitrariedades por las diferentes interpretaciones que sostiene cada tribunal.

Palabras Claves: Juicio Ejecutivo, Impugnación, Recurso de casación



ABSTRACT

In this paper the process of executive action is analyzed, the difference between the UN and Knowledge Process UN enforcement process, the linkage between the executive and the title value judgment. It's about the remedies of both horizontal and vertical media. Background and Characteristics of the remedy of appeal, its origin and the legal framework governs what are analyzed, and a reform of the Code of Civil Procedure which clearly established the appeal must in which the proposed executive judgment when exceptions refer to other aspects of conditional execution. This exercise aims legal Reflection fuel the debate about the applicability of appeal in summary proceedings, for administrators of justice pay particular attention to Define Exceptions admissibility, and avoid arbitrariness by the different interpretations Holding Each court.

Keys Words: executory, impugment.appeal



INDICE

RESUMEN	2
ABSTRACT	3
INDICE	4
CLÁUSULA DE DERECHOS DE AUTOR.....	6
CLAUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL	7
DEDICATORIA.....	8
AGRADECIMIENTOS	9
INTRODUCCION	11
CAPÍTULO I	13
Juicio Ejecutivo.....	13
1.1 Antecedentes históricos:	13
1.2 Concepto:.....	14
1.3: Proceso de Conocimiento y Proceso de Ejecución:.....	15
1.3.1 Diferencias:	19
1.4. Vinculación con el Título Valor:	20
1.5. Procedimiento del Juicio Ejecutivo:.....	24
CAPITULO II	29
Impugnación.....	29
2.1. Generalidades:.....	29
2.2. Antecedentes históricos:	31
2.3. Concepto:.....	33
2.4. Clases:	34
CAPÍTULO III	43
Recurso de Casación Civil en la legislación ecuatoriana.	43



3.1. Casación: Generalidades:.....	43
3.2. Antecedentes históricos:	45
3.3. Concepto:.....	48
3.4. Clases:	49
3.5. Causales:	53
3.6. Requisitos:	56
3.7. Características e Importancia:.....	57
3.8. Recurso de Casación en Juicio Ejecutivo:	62
3.8.1. Análisis Doctrinario:	62
3.8.2. Ejemplos Jurisprudenciales:	73
CONCLUSIONES.....	74
BIBLIOGRAFIA.	77
ANEXOS.	79



CLÁUSULA DE DERECHOS DE AUTOR



Universidad de Cuenca
Cláusula de derechos de autor

Yo; Alejandro Sebastián Larriva Vélez, Autor De La Monografía "Recurso de Casación en el Juicio Ejecutivo: Una Perspectiva que Promueve su Procedencia.", reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Artículo 5, literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Abogada de los Tribunales de Justicia de la República y Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales. El uso que la Universidad de Cuenca hiciera de este trabajo, no implicaría afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Cuenca, Septiembre 2015.

C.I: 171823567-2



CLAUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL



Universidad de Cuenca
Cláusula de propiedad intelectual

Yo, Alejandro Sebastián Larriva Vélez., autor de la monografía "Recurso de Casación en el Juicio Ejecutivo: Una Perspectiva que Promueve su Procedencia", declaro expresamente que todas las ideas, criterios, comentarios y contenidos expuestos en la presente investigación son de mi exclusiva responsabilidad.

Cuenca, Septiembre 2015.

Alejandro Sebastián Larriva Vélez.

C.I: 171823567-2



Universidad de Cuenca
Facultad De Jurisprudencia,
Ciencias Políticas Y Sociales

DEDICATORIA

Dedico de manera especial esta Monografía a mi padre Oswaldo Larriva Alvarado, mi principal cimiento para la construcción de mi vida profesional, enseñándome las bases de la responsabilidad, superación y especialmente lucha. En él tengo un ejemplo a seguir, copiar sus extensas virtudes y su continua lucha del día a día.



AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad de Cuenca y a todo su personal por la amabilidad y atención en lo referente a mi vida como alumno.

Agradecer también a la Facultad de jurisprudencia por la excelencia académica en la carrera de Derecho.

Agradecer a todos los profesores por estos cinco años, por todas sus atenciones y colaboraciones prestadas para llegar a conseguir mis objetivos.

Un agradecimiento especial al Dr. Geovanni Sacasari por ser un gran maestro y apoyarme en el desarrollo de esta monografía.

Gracias a mí enamorada por el apoyo que me ha brindado a lo largo del estudio de esta carrera y en el desarrollo de la monografía.

Gracias a mi familia que me apoyado en todo lo que me hace mejor persona.

Gracias a mis amigos que siempre están a mi lado en las buenas y en las malas.



“Así como los tribunales deben mantener la observancia de la ley sobre los súbditos, la Corte de Casación debe mantenerla sobre los tribunales. El control de la Corte de Casación se ejerce, pues, solamente sobre los órganos de jurisdicción, y no sobre los órganos de la función ejecutiva y de la función legislativa”

Feurbach.



INTRODUCCION

Tanto el juicio ejecutivo como el recurso de casación han sido estudiados históricamente por las diversas líneas doctrinarias, permitiendo tener un panorama claro de los mismos. Al hacer un análisis sobre este tema, hay que tener en cuenta que el artículo 185 de la Constitución de la República establece: “Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al pleno de la Corte a fin de que esta delibere y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o si ratifica el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria. La jueza o juez ponente para cada sentencia será designado mediante sorteo y deberá observar la jurisprudencia obligatoria establecida de manera precedente. Para cambiar el criterio jurisprudencial obligatorio la jueza o juez ponente se sustentará en razones jurídicas motivadas que justifiquen el cambio, y su fallo deberá ser aprobado de forma unánime por la sala”.

Así mismo, el artículo 19 de la Ley de Casación establece que la triple reiteración de un fallo constituye precedente jurisprudencial obligatorio y vinculante para la interpretación y aplicación de las leyes por parte de los jueces de primera instancia y para las cortes Provinciales.

A pesar de los artículos antes mencionados, al igual que en la extinta Corte Suprema de Justicia, en la actual Corte Nacional de Justicia se aplican criterios diversos y diferentes en lo que concierne al recurso de casación en juicios ejecutivos, lo que ocasiona inseguridad jurídica.

En esta Monografía se recogen los criterios de algunos juristas y estudiosos del Derecho respecto del juicio ejecutivo, los medios de impugnación en la ley, el recurso de casación y los dos criterios contrapuestos existentes en la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la actual Corte Nacional de Justicia, de manera que se pueda llegar a tener un mayor campo de estudio respecto a este tema.



De esta manera en el capítulo primero titulado “Juicio Ejecutivo” realiza una recopilación de antecedentes históricos, desarrolla conceptos del juicio ejecutivo, del proceso de conocimiento y proceso de ejecución, las diferencias entre los mismos, posterior a ello se trata la vinculación con el título valor, y por último el procedimiento del juicio ejecutivo.

En el capítulo segundo titulado “Impugnación” inicia con las generalidades del mismo para luego seguir con sus antecedentes históricos, conceptos, y finalmente clases.

En el tercero y último capítulo titulado “Recurso de Casación Civil en la Legislación Ecuatoriana” se abordaran los temas de casación generalidades, antecedentes históricos, concepto, clases, causales, requisitos, características e importancia de la casación, el recurso de casación en juicio ejecutivo, análisis doctrinario, ejemplos jurisprudenciales.

Respondiendo a preguntas como ¿Qué es el juicio ejecutivo? ¿Cuáles son las diferencias entre un proceso de conocimiento y un proceso de ejecución? ¿Cuáles son los medios impugnatorios dentro de nuestra legislación? ¿Qué es el Recurso de Casación? ¿Cuándo se puede interponer el recurso de casación? y la pregunta más importante de todas ¿Cabe o no el recurso de casación en el juicio ejecutivo?

Todas estas preguntas y algunas más tienen cumplida respuesta en el desarrollo de esta monografía.



CAPÍTULO I

Juicio Ejecutivo

1.1 Antecedentes históricos:

El Juicio Ejecutivo tiene como origen el Derecho Germánico, así el tratadista Castro Prieto establece que en un inicio, éste "era una cláusula por medio de la cual el deudor se declaraba sometido en la persona y bienes a los actos de ejecución que quisiera realizar el acreedor, al ser incumplida la obligación (pacto de ingrediendo) sin la intervención previa de alguna intervención judicial". Posteriormente los notarios castellanos en la Edad Media utilizaban e incluían esta cláusula en las escrituras públicas que contenían un crédito; en otras palabras, era una autorización que hacía el deudor para que el juez ejecutara en su nombre y con su patrimonio en sentencia condenatoria, y esta sentencia se justificaba por el débito que se hizo frente al notario a través de confesión judicial.

En los estatutos italianos, se preveía la utilización de un documento de crédito que tenía que reconocerse ante el notario y no era necesario una sentencia condenatoria o una cláusula ejecutiva, dando origen así al llamado Juicio Ejecutivo. Este antecedente da origen al juicio ejecutivo, conforme sostiene el documento del autor alemán Biegleb que hace ciertas consideraciones al juicio ejecutivo en España.

Es importante destacar este antecedente sobre el juicio ejecutivo, pues la legislación española sirvió de base para la legislación hispano-americana, en que cada país estableció sus propios rasgos en el juicio ejecutivo sin alejarse de su naturaleza, es decir, se generalizó que como requisito indispensable debe existir la ejecución, pero acompañada de un procedimiento con características especiales.



1.2 Concepto:

El juicio ejecutivo ha sido estudiado por varios autores a través de la historia, por lo que tiene varias concepciones. Para un mejor entendimiento se lo desglosa en sus componentes: el vocablo "juicio", según el diccionario es la "tramitación de una causa ante un juez", y el vocablo "ejecutivo", significa "que no da espera, ni permite que se difiera a otro tiempo la ejecución".

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental dice que Juicio es el "conocimiento, tramitación y fallo de una causa por un juez o tribunal", y Ejecutivo significa "que no admite espera ni consiente dilación". Por lo que Juicio Ejecutivo es "la resolución del juez o tribunal que hace efectivo lo que consta en un título de forma inmediata"

Para Chiovenda, el Juicio Ejecutivo "es siempre una declaración pero debiendo siempre constar esta declaración (ad solemnitate) por escrito";

Para Caravantes sostiene que "el juicio ejecutivo, más que un juicio es un procedimiento por el que se trata de llevar a efecto, mediante embargo y venta de bienes el cobro de créditos que constan en algún título que tiene fuerza suficiente para constituir por sí mismo plena cobranza. No se dirige pues este juicio a declarar derechos dudosos o controvertidos, sino a llevar a efecto los que se hallan reconocidos por actos o títulos de tal fuerza que constituyen vehemente presunción de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado para que sea desde luego atendido".

Hay que recordar que nuestro código no establece un concepto sobre el juicio ejecutivo pero varias de las normas que contiene se refieren a dicho juicio.



1.3: Proceso de Conocimiento y Proceso de Ejecución:

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano se establece el proceso de conocimiento que es también llamado proceso de cognición.

Para Cueva Carrión, el vocablo cognición deriva del latín *cognitio-onis*, que significa: conocimiento, discernimiento, penetración; también la acción y efecto de conocer. Aplicado a lo judicial: el conocimiento de una cosa que le corresponde a un magistrado. Los latinos utilizaron el término *cognitionalis* para significar: lo relativo al conocimiento judicial. Denominaron *cognitor* al juez que conocía y que sentenciaba una causa. (Cueva Carrión, 179)

Ulpiano utilizaba el termino *cognitus* para significar que la causa ha sido examinada con conocimiento del juez.

En su obra, Cueva Carrión define al proceso de conocimiento como aquel en donde el juzgador, luego de realizar actividades de captación y comprensión de los hechos y del derecho, en forma amplia, profunda, equitativa y detenida, los valora y adopta una decisión de certeza que produce efectos jurídicos imperativos. En otras palabras, el proceso de conocimiento es aquel dentro del cual el juzgador conoce la acción, las excepciones y las pruebas aportadas por las partes; a este conocimiento de los hechos le aplica el derecho y luego de varios juicios de carácter lógico y axiológico adopta una decisión de certeza.

Además sostiene que en el proceso de conocimiento, las partes tienen la facultad de usar, en forma amplia y libre, todos los medios de defensa que les franquea la ley. Este es el proceso por el cual se llega al fondo, a la esencia misma de la verdad jurídica; no existe otro proceso en donde se ventilen los problemas jurídicos con tanta amplitud y profundidad. El juez en este proceso, conoce, toma conocimiento. Tomar conocimiento significa



dominar en forma total y profunda una materia; también, resolver un problema en forma concreta y efectiva. En el proceso de conocimiento el juzgador tiene que resolver varios problemas y tiene que resolverlos jurídica y efectivamente para satisfacer el derecho al acceso a la justicia de las partes procesales; para ello, previamente, debe comprenderlos, debe captarlos en esencia, solamente así podrá darles la más adecuada solución. (Cueva Carrión, 180)

Chiovenda, por su parte, considera al conocimiento del juez como aquel en el que “el juez realiza una serie de actividades intelectuales con el fin de ponerse en situación de juzgar si la demanda es fundada o infundada, y por lo tanto, declarar existente o inexistente la voluntad concreta de la ley de que se trata. Estas actividades intelectuales que son instrumento de la actuación de la voluntad de la ley mediante declaración, constituyen el conocimiento del juez”. (Chiovenda, 204)

Carnelutti dice que el problema principal del proceso de conocimiento es la ambiciosa búsqueda de verdad.

El proceso de conocimiento, como proceso declaratorio y, además de eso, por naturaleza ordinario -donde la verdad es proclamada, después de un amplio debate judicial, como resultado de un juicio de certeza, obtenido por el magistrado a través de la utilización integral de los medios de ataque y defensa de los litigantes-, será indiscutiblemente el instrumento capaz de abrigar esa especie de filosofía política que tiene, en la ideología de la separación de poderes, su base de sustento. (Merryman, 51)

Otros doctrinarios como Hernando DevisEchendía establece que son procesos de juzgamiento o conocimiento o declarativos genéricos, todos los procesos de condena, declarativo puro y declaración constitutiva, que tienen como finalidad la declaración de un derecho o responsabilidad o de la constitución de una relación jurídica, e incluye, por lo tanto, en el grupo



general a los declarativos y a los dispositivos. En todos ellos el derecho, es decir, el juez es quien *iusdicit*¹. (Echendía, 166)

Para Lino Enrique Palacio, el proceso de conocimiento es aquel que tiene por objeto una pretensión tendiente a lograr que el órgano judicial dilucide y declare, mediante la aplicación de las normas pertinentes a los hechos alegados y discutidos, el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes. (Palacio, 304)

Por ejemplo, si firma un contrato (cualquiera que sea) y éste no se cumple, se inicia un juicio de "conocimiento" en el que hay que pasar por un proceso completo es decir presentar todas las pruebas que demuestren su derecho.

El catedrático Káiser Machuca establece que el proceso de conocimiento o cognición, es aquel que busca del juez, una DECLARACION DE VOLUNTAD sobre una pretensión discutida, lo que hace necesario un juzgamiento contradictorio, con actuaciones probatorias, etc., a fin de "transformar los hechos en derecho" y dar la razón al contendiente que efectivamente lo tenga.

"Sin conocimiento previo, al juez le es imposible adoptar una decisión de certeza, decisión de certeza que es indispensable para llegar a la fase siguiente, a la fase de ejecución" (Cueva Carrión, 180)

El juicio ejecutivo, en cambio tiene por finalidad hacer efectivo un derecho cierto, es decir la pretensión tiende a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los títulos llamados ejecutivos previstos en la Ley; en otras palabras, es el que se funda en documento que trae aparejada ejecución, como por ejemplo lo es el pagaré, la letra de cambio, el cheque, etc.

¹IusDicit significa: Derecho de decidir.



Así por ejemplo, si A firma una letra de cambio y no la paga a B, se inician una demanda ejecutiva; en este tipo de juicio nada se debe probar, sólo se ejecuta la obligación, reconocida en el título ejecutivo que se ejecuta y que está reconocido en la ley.

Así Cueva Carrión trae una comparación entre el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución para que se pueda entender de mejor manera. Este autor establece que en el proceso de conocimiento, el juez declara lo que debe ser; en cambio, en el proceso de ejecución, se obtiene que se haga lo que debe ser. En el primer caso, es una declaración de deber ser; en el segundo, es un acto, es un hacer de ese deber ser, porque en el proceso de ejecución debe hacerse como debe ser.

También trae otro punto de vista: por el proceso de conocimiento, el juez, al derecho incierto, lo torna cierto; a algo que está incompleto, lo completa; donde no hay luz, pone claridad. Es decir hace saber jurídicamente a las partes, en forma cierta y definitiva, lo que deben hacer frente a una situación y este conocimiento es imprescindible para que los ciudadanos puedan actuar, porque, sin conocimiento de cómo se debe actuar, es imposible actuar. En fin: si el derecho no es cierto no se puede saber y, en consecuencia, no se puede actuar.

El Dr. Káiser Machuca señala que los procesos de ejecución, son aquellos por medio de los cuales se busca no una sentencia o declaración de un derecho, sino una MANIFESTACION DE VOLUNTAD, esto es, la actuación del órgano judicial encaminada a la efectivización, materialización o cumplimiento de un acto ya titulado o de un derecho preconstituido; en otras palabras, en miras a que se haga efectivo el derecho ya declarado o determinado, con una modificación de la realidad, en miras a “transformar el derecho en hechos”. El derecho preexistente sin discusión, solo cabe hacerlo cumplir. En este proceso, el Juez ejerce jurisdicción, no mediante actos de juzgamiento, sino de ejecución de aquella pretensión cuya



existencia esta ya declarada o titulada. Por ejemplo un proceso de ejecución de un laudo arbitral, o un acta de mediación.

1.3.1 Diferencias:

Cueva Carrión establece que generalmente, previa a la ejecución, es indispensable e ineludible tramitar íntegramente un proceso de conocimiento, tal como ocurre en el caso típico de juicio ordinario; pero en otras ocasiones no pues se procede directamente a la ejecución. En este caso, no se requiere tramitar previamente el juicio de conocimiento porque ya existe título ejecutivo materializado en el instrumento que sirve de base a la ejecución; aquí la ley se limita a señalar, en forma precisa, las condiciones que debe cumplirse y la forma como debe realizarse la ejecución. Así las principales diferencias que se dan entre estos dos tipos de procesos son las siguientes:

- El juicio ejecutivo es un juicio corto y de "ejecución", en cambio el juicio de "conocimiento" como ya se lo dijo, el juez dice el derecho, el *iusdecit*, o si se quiere, aquí el juez declara el derecho.
- La mayor diferencia entre ambos es que, en el juicio ejecutivo junto con la demanda se presenta el título o documento ejecutivo.

Desde el punto de vista del cumplimiento del mandato judicial o de la ejecución:

- En el proceso de conocimiento no se puede proceder a la ejecución si no media la declaración judicial de certeza; mientras que en el juicio de ejecución, se procede directamente a ejecutar.
- En el juicio de conocimiento la ejecución depende de la existencia de una declaración de certeza previa y puede darse o no la ejecución, según exista o no dicha declaración de certeza; en el proceso de ejecución, la ejecución se dá sin más.



- De lo anterior surge otra diferencia: en el proceso de conocimiento, la ejecución es condicionada a la existencia de un proceso y a la solución positiva de éste, es mediada, es decir, el conocimiento actúa como un medio para llegar a la ejecución y es dependiente, es decir la ejecución depende del conocimiento previo del juez y de la solución que le hubiere dado; en cambio, en el proceso de ejecución, no existe esa dependencia.

La diferencia desde la función que cumple uno y otro proceso:

- El proceso de conocimiento cumple diversas funciones a) De constitución, b) De declaración c) De condena; el proceso de ejecución, cumple la única función de ejecutar lo decidido en forma plena e irrevocable.

Por el orden como se dan en la práctica:

- En los procesos de conocimiento, primero se realiza el proceso de conocimiento y luego la ejecución; pero, esto no quiere decir que todo proceso de ejecución, necesariamente, debe preceder un proceso de conocimiento, porque existen procesos de ejecución sin que hubiere tenido lugar la fase de conocimiento.

1.4. Vinculación con el Título Valor:

El título valor es también denominado por algunos especialistas como título de crédito. Esta denominación de Título de Crédito ha sido criticada por la doctrina, porque se la consideraba inexacta en cuanto a su contenido y a su naturaleza. Entonces para sustituir esta denominación se propone la denominación de Título Valor; de igual manera esta denominación también es inexacta para algunos autores.



Dicho eso para algunos autores el título de crédito es un documento que autoriza al portador legítimo para ejercitar contra el deudor y transferir el derecho literal y autónomo en él consignado.

Para Garrigues, título valor es un documento sobre un derecho privado cuyo ejercicio está condicionado jurídicamente a la posesión del documento.

Para César Vivante, título valor es: “el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo”.

Para otros autores, el título valor es un documento que en sí mismo tiene el fundamento de ciertos derechos. En sí, el derecho a cobrar (a su vez la obligación de otro sujeto de pagar) la cantidad establecida en el documento.

El título valor puede circular desvinculado de su causa (autónomo) y es ejecutable, dentro de ciertos plazos, sin necesidad de invocar la causa.

Son ejemplos de títulos valores la letra de cambio, el pagaré a la orden y el cheque.

Sin embargo no se debe confundir al título valor con el título ejecutivo pues hay que tener claro que el título ejecutivo es el género y título valor la especie, así también se puede afirmar que todo título valor puede ser título ejecutivo, pero no todos los títulos ejecutivos son títulos valores.

En otras palabras, el llamado título ejecutivo es más amplio y comprende también a los títulos valores. Así los títulos ejecutivos por ejemplo son aquellos que certifican que A tiene el derecho de cobrar a B, y así mismo que B está obligado a pagar a A.

Para la Enciclopedia Jurídica, el título ejecutivo es el documento que lleva aparejada ejecución. Así como:

- La sentencia de condena firme.
- Los laudos o resoluciones arbitrales firmes.



- Las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso, acompañadas, si fuere necesario para constancia de su concreto contenido, de los correspondientes testimonios de las actuaciones.
- Las escrituras públicas, con tal que sea primera copia, o si es segunda, que esté dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar, o de su causante, o que se expida con la conformidad de todas las partes.
- Las demás resoluciones judiciales y documentos que, por disposición de ley, lleven aparejada ejecución.

Para algunos autores, el título ejecutivo es aquel documento al cual la ley atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de una obligación que consta en él.

El título ejecutivo para el autor Alsina es "la base del procedimiento de ejecución". Y los divide en judiciales y extrajudiciales, y éstos, a su vez, en; a) convencionales, y b) administrativos.

Para Liebman el título ejecutivo es " un acto jurídico que tiene eficacia constitutiva, porque es fuente inmediata y autónoma de la acción ejecutiva, la cual es, por lo tanto, en su extensión y en su ejercicio, independiente del crédito".

En la legislación ecuatoriana existen varios artículos referentes a los títulos ejecutivos. El artículo 347 del Código de Procedimiento Civil establece que en el juicio ejecutivo, son solemnidades sustanciales: 1. Haberse aparejado a la demanda título ejecutivo; y, 2. Sustanciar las excepciones que se propongan dentro del respectivo término. El hecho de no ser ejecutiva la obligación será materia de excepción y, consiguientemente, resuelta en la sentencia.



El artículo 413 del mismo cuerpo legal dice que son títulos ejecutivos: la confesión de parte, hecha con juramento ante juez competente; la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; la copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas; los documentos privados reconocidos ante juez o notario público; las letras de cambio; los pagarés a la orden; los testamentos; las actas judiciales de remate o las copias de los autos de adjudicación debidamente protocolizados, según el caso; las actas de transacción u otras que contengan obligaciones de dar o hacer alguna cosa; y los demás instrumentos a los que leyes especiales dan el carácter de títulos ejecutivos.

El artículo 419 establece que la demanda se propondrá acompañada del título que reúna las condiciones de ejecutivo.

Así también el artículo 415 ibídem señala las características que deben tener las obligaciones contenidas en los títulos ejecutivos. Lo establece con el siguiente texto: “Para que las obligaciones fundadas en algunos de los títulos expresados en los artículos anteriores, sean exigibles en juicio ejecutivo, deben ser claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido cuando lo haya. Cuando alguno de sus elementos esté sujeto a lo expresado en un indicador económico o financiero de conocimiento público, contendrá también la referencia de éstos. Se considerarán también de plazo vencido las obligaciones cuyo vencimiento se hubiere anticipado como consecuencia de la aplicación de cláusulas de aceleración de pagos, que hubieren sido pactadas. Cuando se haya cumplido la condición o ésta fuere resolutoria, podrá ejecutarse la obligación condicional y, si fuere en parte líquida y en parte no, se ejecutará en la parte líquida.

En otros países como en Colombia, todos los documentos que pretenden ser títulos ejecutivos, deben cumplir con ciertas exigencias establecidas en la ley, es decir que contengan una obligación expresa, clara y exigible, estos conceptos han sido definidos así en la doctrina:



EXPRESA.- Que la obligación se encuentre declarada en el documento que la contiene, su alcance y pueda determinarse con precisión y exactitud la conducta a exigir al demandado.

CLARIDAD.- Tiene que ver con la evidencia de la obligación, su comprensión, la determinación de los elementos que componen el título, tanto en su forma exterior como en su contenido, debe ser preciso su alcance. Que de su sola lectura, se pueda desprender el objeto de la obligación, los sujetos activos y pasivos y, sobre todo, que haya certeza en relación con el plazo, de su cuantía o tipo de obligación, valga decir que en él aparezcan debidamente determinados y señalados, sus elementos objetivos (crédito) y subjetivos (acreedor- deudor).

EXIGIBLE.- Hace referencia al aspecto solución de la obligación, es decir que no esté sometida a plazo o condición, o que de estarlo, se haya vencido el plazo o cumplido la condición, entendiéndose que en este último evento, el cumplimiento o extinción de la obligación depende de un hecho futuro e incierto; hecho que puede ser un acontecimiento natural o la conducta de determinado sujeto, de tal suerte que la eficacia de la prestación está subordinada al hecho...”

1.5. Procedimiento del Juicio Ejecutivo:

Para comenzar este tema, hay que recordar que no es igual hablar de procedimiento, juicio y de proceso, pues conceptualmente son diferentes. El Código de Procedimiento Civil no define lo que es proceso, pero habla de juicio en el artículo 57: “Juicio es la contienda legal sometida a la resolución de los jueces”, pero este artículo se refiere al proceso de jurisdicción contenciosa por lo que deja de lado al de jurisdicción voluntaria y al proceso en general. Hay que anotar que proceso es el género y juicio es especie. Por lo tanto, todo juicio es un proceso, pero no todo proceso es un juicio.



Es importante también la diferencia de proceso y procedimiento, ya que como establece el Dr. Káiser Machuca, el proceso es el continente y el procedimiento es el contenido, el proceso es el fondo y el procedimiento es la forma; en palabras más sencillas el proceso es el vehículo y el procedimiento es el camino que debe recorrer en el accionar ante los órganos de justicia. En el ordenamiento procesal civil hay cerca de cuarenta tipos de procesos; un aspecto que distingue a uno de otros es el procedimiento. En la práctica, según el Dr. Machuca, determinar el tipo de proceso tiene mucha importancia pues la fijación del tipo de proceso en la demanda, es facultativo del actor, pero la dirección del procedimiento es responsabilidad del juez. La indebida fijación del tipo de proceso llevaría al demandado a deducir excepción de improcedencia del trámite, pero la indebida dirección de los actos llevaría a la violación del procedimiento.

El juicio ejecutivo comienza -como todos los demás procesos- con la demanda que según el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, es el acto en que el demandante deduce su acción o formula la solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo. No hay que olvidar lo que establece el artículo 64 del mismo cuerpo legal: todo juicio principia por la demanda; pero podrán preceder a ésta los siguientes actos preparatorios:

- 1º. Confesión judicial;
- 2º. Exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción;
- 3º. Exhibición y reconocimiento de documentos;
- 4º. Información sumaria o de nudo hecho, en los juicios de posesión efectiva, apertura de testamentos y en los demás expresamente determinados por Ley; y,
- 5º. Inspección judicial



Tampoco hay que olvidar que los artículos 347 y 419 establecen que la demanda tiene que ir acompañada del título que reúna las condiciones de ejecutivo.

El siguiente paso es la calificación por parte del juez, para ver si cumple o no los requisitos establecidos en la ley. Aceptada la demanda se concede tres días a la contraparte para que cumpla con la obligación o proponga excepciones.

Así mismo, el artículo 421 del Código de Procedimiento Civil en su inciso segundo establece que si el ejecutante acompaña a la demanda certificado del Registrador de la Propiedad en el que conste que el ejecutado tiene bienes raíces que no están embargados, el juez, al tiempo de dictar la providencia de que habla el inciso anterior, prohibirá que el ejecutado venda, hipoteque o constituya otro gravamen o celebre contrato que limiten el dominio o goce de los bienes que, determinados por el juez, alcancen para responder por el valor de la obligación demandada. La prohibición se notificará a los respectivos Registradores de la Propiedad, para los efectos legales. El artículo 422 establece que también podrá solicitarse el secuestro o la retención de bienes muebles.

Posteriormente, como en los demás procesos, se practica la citación, la contestación de la demanda que la contraparte debe hacerla en el término de tres días. En el ordenamiento jurídico no hay una definición de contestación a la demanda, pero algunos autores la definen como el acto procesal mediante el cual el demandado ejerce su derecho potestativo a la defensa, se pronuncia sobre el contenido de la demanda, ya aceptándola en todo o en parte o contradiciendo las pretensiones del actor, o proponiendo excepciones.

Según el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, si el deudor no paga ni propone excepciones dentro del respectivo término, el juez, previa notificación, pronunciará sentencia, dentro de veinticuatro horas, mandando que el deudor cumpla inmediatamente la obligación. La sentencia causará ejecutoria.



Si se contesta proponiendo excepciones, se convoca a junta de conciliación que es la diligencia judicial, en la que se busca un acuerdo de las partes procesales para poner fin al litigio.

Luego de esto se da paso al Término Probatorio que según el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil establece que si las excepciones versan sobre hechos que deban justificarse, se concederá el término de seis días para la prueba. El artículo 434 del mismo cuerpo legal establece que vencido el término de prueba, el juez concederá el de cuatro días para que las partes aleguen², término que correrá al mismo tiempo para todas y vencido el cual pronunciará sentencia³.

El proceso termina con la etapa de ejecución. Aquí se establece honorarios, intereses y el capital. El artículo 438 del Código de Procedimiento Civil establece que ejecutoriada la sentencia, el juez, al tratarse de demanda por pago de capital e intereses, fijará la cantidad que debe pagarse por intereses y dispondrá que el deudor señale dentro de veinticuatro horas, bienes equivalentes al capital, intereses y costas, si hubiere sido condenado a pagarlas.

De considerarlo necesario, el juez puede nombrar un perito para que haga la liquidación de intereses. Este perito será irrecusable y su nombramiento no se notificará a las partes; tampoco debe posesionarse, bastando que en el informe, exprese que lo emite con juramento. Si el deudor no señala los bienes para el embargo o no fueran suficientes, el acreedor señalará los bienes para el embargo. Si la obligación versare sobre especie o cuerpo cierto, el artículo 440 establece lo siguiente: Si el juicio hubiere versado sobre la entrega de una especie o cuerpo cierto, el ejecutado será compelido a la entrega, de ser necesario, con el auxilio de la Policía Nacional. Si la obligación fuere de hacer, y el hecho pudiere realizarse, el juez dispondrá que se realice por cuenta del

² Alegatos son argumentos lógicos y jurídicos que se exponen ante el juzgador.

³ Art. 269 del CPC dice que sentencia es la decisión del Juez acerca del asunto o asuntos principales del juicio



deudor. Si la especie o cuerpo cierto no pudiese ser entregado al acreedor, o no se obtuviere la realización del hecho, el juez determinará la indemnización que deba pagarse por el incumplimiento y dispondrá el respectivo cobro, por el procedimiento de apremio real. Si el hecho consistiere en el otorgamiento y suscripción de un instrumento, lo hará el juez en representación del que deba realizarlo. Se dejará constancia en acta, suscrita por el juez, el beneficiario y el secretario, en el respectivo juicio.

El artículo 436 del Código de Procedimiento Civil establece que en este juicio puede el ejecutante interponer los recursos que concede el Código para los juicios ordinarios; pero el ejecutado solo puede apelar de la sentencia, y en los demás casos, no podrá interponer ni aún el recurso de hecho.



CAPITULO II

Impugnación

2.1. Generalidades:

Según el catedrático Káiser Machuca, docente de la Universidad de Cuenca, la impugnación no es otra cosa que la contradicción, refutación o ataque procesal a las resoluciones judiciales, esto es, a los actos del juez que no se encuentran firmes y que son susceptibles de rebatir por medio de los recursos establecidos en la ley, para corregirlos, depurarlos o dejarlos sin valor. Aunque también se pueden impugnar pruebas y otros actos procesales.

El estudio de este tema tiene como punto de partida el principio de doble instancia. Alberto Hinostroza Mínguez establece que al dividirse el proceso en dos instancias o grados jurisdiccionales, se atribuye competencia a un órgano jurisdiccional para conocer en la primera instancia, y a otro órgano para conocer en la segunda instancia. Existe así un doble grado de jurisdicción o pluralidad de instancias. La función de los órganos jurisdiccionales de segunda instancia es la de revisar las decisiones de los magistrados de primera instancia, siempre y cuando alguna de las partes interponga el correspondiente medio impugnatorio.

Así mismo, establece que la instancia plural o principio de doble instancia obedece a una concepción jurídica encaminada a disminuir la posibilidad del error judicial. A través de la instancia plural se obtiene una mayor seguridad jurídica con el control que ejercen los diferentes órganos jurisdiccionales. La instancia plural es, pues, una garantía de una mejor justicia que se logra con la fiscalización de los actos procesales impugnados (generalmente resoluciones) que lleva a cabo el órgano judicial jerárquicamente superior, el mismo que se



pronuncia sobre su validez o invalidez, confirmando o revocando -en ese orden- lo resuelto por el órgano jurisdiccional de inferior jerarquía.

Conforme el criterio de Hinostroza Mínguez, las resoluciones judiciales son susceptibles de revisión, con arreglo a la ley, en una instancia superior. La interposición de un medio de impugnación constituye un acto voluntario del justiciable. Lo resuelto en segunda instancia constituye cosa juzgada. Su impugnación solo procede en los casos previstos en la ley. Es decir el proceso se resuelve en dos instancias, salvo disposición legal distinta. (453 y ss.)

En otras palabras, el principio de doble instancia busca garantizar que un proceso sea conocido por lo menos por dos tribunales de distinto grado, en miras a asegurar certeza y justicia en las resoluciones, disminuyendo el margen del error judicial mediante el control o fiscalización del superior sobre las decisiones del inferior.

El numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República establece lo siguiente: En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.

Así, el máximo cuerpo normativo de la legislación nacional establece claramente que se podrá recurrir toda resolución o fallo ante el órgano superior.

Para Enrique Vescovi, la teoría general de la impugnación tiene por objeto el control general de la regularidad de los actos procesales y, en especial, la actividad del tribunal, principalmente por medio de sus resoluciones. Esto es, trata de efectuar un control a posteriori de la actuación de la jurisdicción, especialmente poniendo fin a las irregularidades cometidas. Funciona, entonces, como un remedio a una actividad indebida. (13)



2.2. Antecedentes históricos:

Históricamente, los recursos de impugnación fueron establecidos en el derecho romano, pues antes de éste, el enjuiciamiento estaba revestido de un carácter infalible e inspirado por la divinidad. Fue Teodosio, en su Código Teodosiano, quien introdujo una figura llamada Ruego o *Rogatio*, y fue Justiniano en su obra *Pluri Iuris Civilis* o primer Código de Justiniano, quien introdujo la figura del *RuegunApellatio*.

En la época de la república romana, se introdujeron varias figuras, entre ellas la apelación para que el recurrente pueda reclamar una revisión, y si es el caso, una anulación de las resoluciones que considera injustas o ilegales.

En épocas posteriores, la impugnación era un medio de defensa pero solo contra sentencias de muerte.

Para llegar a la decisión final no se seguía un debido proceso, sino que el magistrado presentaba su resolución para que la votara y confirmara la ciudadanía, que ya estaba informada con anterioridad por las discusiones que se realizaban en la comunidad. Este proceso se entendía como una instancia de gracia; en otras palabras, pedían clemencia sin dejar de lado la condena. Esto no podía darse contra sentencias absolutorias dictadas en primer grado, pues el tribunal del pueblo estaba aún menos sometido a reglas jurídico-procesales que el magistrado de primera instancia.

Algunos autores critican esta impugnación y expresan que no debería ser antecedente de los recursos impugnativos, argumentando que no hay un órgano jurisdiccional de mayor jerarquía que el que emitía la resolución impugnada, encargado de revisar el fallo y resolver sobre su modificación o revocación.

Al final de la República romana, los recursos de los que disponían las partes eran: la *in integrumrestitutio*⁴; la *revocatio in duplum*⁵ y la *apellatio*⁶.

4La *restitutio in integrum* era un remedio extraordinario utilizado por el Pretor en determinadas circunstancias, para anular un acto o negocio jurídico, que si bien perfectamente válido, acarrearba consecuencias inicuas y producía efectos notoriamente injustos y perjudiciales. La *integrumrestitutio* determinaba la nulidad de la sentencia, cuando en el litigio se dictaba un acto jurídico o se aplicaban inexactamente principios del derecho civil que afectaban a algunos de los contendientes por resultar injustos o inequitativos, o también cuando se hubiese sido víctima de dolo de intimidación o de un error justificable o se hubiese descubierto la existencia de un testimonio falso, en el que se hubiere apoyado la resolución. En estos casos había que solicitar la *in integrumrestitutio*, es decir, la decisión en



En cuanto al termino para interponer este recurso, las partes podían establecer hasta un año útil, contado a partir del momento que se descubriera la causa del mismo, pero Justiniano extendió a cuatro años continuos, pero solo se ordenaba dar entrada a la demanda después que el magistrado realizaba el examen del caso, cerciorándose que reunía todas las condiciones.

Las personas podían también quejarse y reclamar la decisión del magistrado, ante un magistrado superior (*appellare magistratum*). Este es el antecedente de la apelación que es uno de los medios impugnatorios existentes en la legislación ecuatoriana.

Según el Dr. Machuca, el derecho a la impugnación de las resoluciones judiciales ha sido reconocido históricamente por todas las legislaciones e incorporado incluso en sus constituciones, con el fin de asegurar mayor acierto y eficacia a las decisiones judiciales, a través de la corrección de errores o desajustes de fondo o de forma que deliberadamente o no, pueden haberse deslizado en las providencias del juez, ser también falible. Alrededor del tema se ha construido la llamada Teoría de la Impugnación, fundamentada en el principio de igual nombre.

El derecho a impugnar tiene vida desde antes de la constitución de la relación jurídico- procesal que la se dá con la citación; por ejemplo, cuando el juez no acepta a trámite la demanda, providencia de la cual el afectado puede apelar ante el superior. Este derecho se mantiene vigente durante el desarrollo de dicha relación y respecto de casi todas las providencias que dicte y que las partes consideren desajustadas a Derecho. Sin embargo hay casos de

virtud de la cual el pretor, teniendo por no sucedida la causa de juicio, destruía los efectos poniendo las cosas en el estado que tenían antes.

5Revocatio in duplum: Se afirma que procedía tratándose de sentencia afectada de vicios de forma o de fondo y en caso y en caso de éxito anulaba esta, pero si perdía el recurrente se le condenaba al doble de lo sentenciado. La revocatio in duplum, se interponía contra resoluciones dictadas con violación de la ley, buscando su anulación, pero si no era probada la causa de la anulación de la sentencia, al recurrente se le duplicaba la condena, de ahí el nombre de la impugnación.

⁶ La Apellatio, su origen se encuentra en la ley Julia judiciaria del emperador Augusto, que autorizaba primero a apelar ante el prefecto, y de este ante el emperador, y preservaba el derecho de todo magistrado bajo la república de oponer su veto a las decisiones de un magistrado igual o inferior, anulándola o reemplazándola por otra sentencia; además admitía el efecto suspensivo o sea que impedía la ejecución de la sentencia impugnada, y los efectos que producía, como se afirma era confirmarla o revocarla para, en su caso, dictar una nueva, la cual también era apelable hasta llegar al último grado, teniendo en cuenta, que quien juzgaba en última instancia era el emperador.



excepción en los que la misma ley deniega cualquier recurso, o limita el derecho a apelar únicamente de la sentencia, con sustento en el precepto rector consagrado en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil: "siempre que la ley no deniegue expresamente un recurso, se entenderá que lo concede"

De esta manera, los medios impugnatorios tienen su origen en el derecho romano, que ulteriormente fue recogido por los franceses en el Código Napoleónico y deriva posteriormente en el ordenamiento jurídico nacional.

2.3. Concepto:

Por impugnar se entiende el hecho de dejar sin efecto algo. Al hablar de impugnación de providencias judiciales, se busca dejar sin efecto la resolución del juez de primera instancia.

Cabanellas dice: "Impugnación es la objeción, refutación, contradicción, se refiere a los actos y escritos de la parte contraria como a las resoluciones judiciales contra las cuales cabe algún recurso."

Según Alberto Hinostroza Mínguez, los medios impugnatorios son actos procesales que se caracterizan por ser formales y motivados. Representan manifestaciones de voluntad realizadas por las partes (y aun por los terceros legitimados) dirigidas a denunciar situaciones irregulares o vicios o errores que afectan a uno o más actos procesales, y a solicitar que el órgano jurisdiccional revisor proceda a su revocación o anulación, eliminándose de esta manera los agravios inferidos al impugnante derivados de los actos del proceso cuestionados por él. (457)

Según Monroy Gálvez , "Podemos definir este instituto procesal como el instrumento que la ley le concede a las partes o a terceros legitimados para que soliciten al juez que, el mismo u otro de jerarquía superior, realicen un nuevo examen de un acto procesal o de todo el proceso, a fin de que se anule, revoque éste, total o parcialmente."

Para Osvaldo Gozaini, "el reconocimiento del derecho a impugnar la decisión, se viabiliza en la senda de los recursos, que son medios de transferir la queja expresiva de los agravios, que son considerados presentes en la resolución cuestionada."

Para la doctora Ariano : "...todas las impugnaciones (pero en particular la apelación), en tanto permiten llevar a conocimiento de un segundo juez lo resuelto por el primero, son una suerte de 'garantía de garantías', en buena



cuenta una garantía del debido proceso mismo, porque son el más efectivo vehículo para, por un lado, evitar el ejercicio arbitrario del poder por parte del juez *A quo* y, por otro, para permitir corregir (lo antes posible) los errores del mismo.”

Para otros autores, los medios impugnatorios constituyen todos aquellos instrumentos de los que se valen las partes con la finalidad de que puedan cuestionar la validez de un acto procesal, que presuntamente contiene un vicio o error que lo afecta, el mismo que debe ser corregido por el propio órgano que lo emite o por su superior.

Hay que recordar que históricamente han surgido varios medios de impugnación de las resoluciones judiciales. También hay que establecer que el término “recurso” se entiende como sinónimo de impugnación.

De manera general recurso es un mecanismo procesal que tienen las partes para objetar aquellas providencias que le causen perjuicio y lograr un nuevo examen y reconsideración de la providencia cuestionada.

Algunos autores como Escriche establecen que recurso es “La acción que queda a la persona condenada en juicio para poder acudir a otro juez o tribunal en solicitud de que enmiende el agravio que cree habersele hecho”

Así mismo, el autor Pereira establece “Los recursos procesales son los medios que la ley otorga a las partes para controlar la aplicación correcta que el juez debe hacer en sus resoluciones del derecho Procesal y del derecho sustancial”

Para Alessandri “Recurso es todo medio que concede la ley para invalidar o dejar sin efecto resoluciones judiciales”.

2.4. Clases:

En la legislación ecuatoriana existen varios medios de impugnación, pero fundamentalmente existen 2 tipos.

- 1) Medios de impugnación dentro de la misma instancia
- 2) Medios de impugnación ante otra instancia

1.- En los medios impugnatorios en la misma instancia, el conocimiento del recurso le corresponde al mismo juez o tribunal que dictó la resolución y son también conocidos como Recursos Horizontales, que en doctrina también los conocen como Remedio Procesal o De Reposición. Dentro de estos están la



Aclaración, Aplicación Reforma y Revocatoria. Para el Dr. Machuca estos recursos tienen por objeto evitar dilatorias y gastos derivados de recursos verticales ante otra instancia, sobre providencias de mero trámite o que adolecen de errores formales, que bien pueden ser revisados o reconsiderados por aquél.

Con los recursos antes mencionado, las partes podrán solicitar al juez la aclaración, la ampliación, la reforma y la revocación. Así lo establece el artículo 289 del Código de Procedimiento Penal, que dice: Los autos y decretos pueden aclararse, ampliarse, reformarse o revocarse, por el mismo juez que los pronunció, si lo solicita alguna de las partes dentro del término fijado en el artículo 281. Pero en relación a la sentencia, el artículo 281 del mismo Código establece lo siguiente: El juez que dictó sentencia, no puede revocarla ni alterar su sentido en ningún caso; pero podrá aclararla o ampliarla, si alguna de las partes lo solicitare dentro de tres días. Es decir que la sentencia no puede ser ni reformada ni revocada por el mismo juez que la dictó.

La Aclaración, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es la enmienda del texto de una sentencia por el mismo juzgador inmediatamente después de notificarla. El mismo diccionario nos trae la definición de recurso de aclaración que es el que se interpone para obtener del sentenciador que explique el pronunciamiento que se nota obscuro o deficiente.

Enrique Vescovi la define la aclaración como la posibilidad de que, una vez dictada la sentencia (y expedida, firmada, etc.), se aclare, por el juzgador, alguna expresión oscura de ella. (71)

El artículo 282 del Código de Procedimiento Civil determina: “La aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura [...] tanto para la aclaración como para la ampliación se oírá previamente a la otra parte”

La Ampliación: El diccionario de la Real Academia de la Lengua la define como “el desarrollo que por escrito o de palabra se da a una proposición o idea, explicándola de varios modos o enumerando puntos o circunstancias que con ella tengan relación, a fin de hacerla más eficaz para conmover o persuadir”. En el sentido procesal, la ampliación es pertinente cuando el juez no ha decidido todos los puntos que debería considerar en la providencia, es decir, cuando ésta se considera incompleta y no se resuelve todos los puntos en litigio.



Enrique Vescovi establece que la ampliación se refiere al caso en que el tribunal, luego de la sentencia, la complementa para comprender algún punto no incluido (y, naturalmente, que debió haber estado). (71)

El artículo 282 del Código de Procedimiento Civil establece “la ampliación, cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos, o se hubiere omitido decidir sobre frutos, intereses o costas [...] tanto para la aclaración como para la ampliación se oirá previamente a la otra parte”

La Reforma: El diccionario de la Real Academia de la Lengua sobre el recurso de reforma o reposición mantiene que es el que se interpone para pedir a los jueces que reformen sus resoluciones, cuando éstas no son sentencias.

Para Alessandri, el recurso de reposición consiste en decirle al mismo tribunal que dicta una resolución, que la deje sin efecto o que la modifique.

La Revocatoria: Esta palabra proviene del latín *revocare* que significa dejar sin efecto un mandato o resolución. Este medio de impugnación persigue que se deje sin efecto la providencia dictada.

Enrique Vescovi expresa que la revocatoria constituye un medio impugnativo que tiene por objeto que el mismo órgano que dictó una providencia la revoque por contrario imperio. (85)

Escriche dice que la revocación consiste “en la anulación de la disposición adoptada o del acto otorgado; tales como la donación, un testamento”

No hay que olvidar que cuando se pide aclaración o ampliación, no se está, en estricto sentido, impugnando nada o dejando sin efecto la providencia del juez, pero sí se consigue que el juez que dictó la sentencia se pronuncie sobre algo que se considera obscuro o incompleto y modifique la providencia.

2.- Los medios impugnatorios ante otra instancia significa que será un tribunal superior, es decir de mayor jerarquía, el que revisará la providencia dictada por un juez inferior. Esta revisión siempre se da a petición de parte. Estos medios impugnatorios son conocidos como Recursos Verticales. Dentro de estos están la Apelación, el Recurso de Hecho y el Recurso de Casación. En la práctica se impugnan ante otra instancia las providencias dictadas por el juez en cuanto nieguen la aclaración, ampliación, reforma y revocatoria de un auto o decreto con fuerza de auto. También se impugnan las sentencias que se consideran desfavorables en todo o en parte a los intereses de las partes procesales. Aclarando que podría darse el caso que las dos partes estén en desacuerdo con la sentencia por lo que ambas ejercerían su derecho a la impugnación.



En todos los casos se debe recordar que el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil establece que “Siempre que la ley no deniegue expresamente un recurso se entenderá que lo concede”.

La Apelación: Según el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, la Apelación es la reclamación que alguno de los litigantes u otro interesado hace al juez o tribunal superior, para que revoque o reforme un decreto, auto o sentencia del inferior.

Para Pallares “el recurso de apelación es el que se interpone ante el juez de primera instancia, para que el tribunal de segunda modifique o revoque la resolución contra la cual aquél se hace valer”.

Enrique Vescovi considera que la apelación constituye el más importante recurso de los ordinarios, teniendo por fin la revisión, por el órgano judicial superior, de la sentencia del inferior.

El Dr. Káiser Machuca expresa que el recurso de apelación, conocido también como recurso de alzada, es el medio más común y frecuente de impugnación de las providencias judiciales, cuando no pueden ser reconsideradas por el juez que las dictó, ya por su negativa o por no ser procedente como sucede en el caso de la sentencia. Continúa estableciendo que por la apelación se persigue que el pronunciamiento (sentencia, auto o excepcionalmente decreto) del juez *a quo* sea reconsiderada por el juez o tribunal *ad quem*, esto es, por una instancia superior y diversa a la que dictó la providencia recurrida.

Sobre las circunstancias de este recurso, el Código de Procedimiento Civil las regula en los siguientes artículos:

Término para apelar:

Artículo 324.- La apelación se interpondrá dentro del término de tres días; y el juez, sin correr traslado ni observar otra solemnidad, concederá o denegará el recurso. No se aceptará la apelación, ni ningún otro recurso, antes de que empiece a decurrir el término fijado en el inciso anterior, salvo lo dispuesto en los artículos 90 y 306.

Quiénes pueden apelar:

Artículo 325.- Pueden interponer el recurso de apelación las partes que han intervenido en el juicio, y los que tengan interés inmediato y directo en el pleito; como el comprador de una cosa raíz, cuando un tercero ha promovido pleito de propiedad al vendedor y ha obtenido sentencia favorable; o al contrario, si



habiéndose seguido pleito con el comprador, se declaró en la sentencia que la cosa pertenecía al tercero que promovió el pleito, en cuyo caso puede apelar el vendedor que tuviere interés.

Providencias Apelables:

Artículo 326.- Se puede apelar de las sentencias, de los autos y de los decretos que tienen fuerza de auto. Sin embargo, no son apelables los autos o decretos que no ocasionan gravamen irreparable en definitiva, ni aun cuando condenen en costas y multas; y, en general, toda decisión a que la ley deniegue este recurso. Tampoco son apelables las providencias sobre suspensión o prórroga de términos, las que conceden términos para pruebas, las que manden practicarlas, las que califiquen interrogatorios, las que concedan términos extraordinarios, y las demás de mero trámite.

Artículo 327.- En todos los juicios sumarios en que, según su trámite especial, no hubiere apelación del fallo definitivo, tampoco se concederá este recurso, ni aún el de hecho, de ninguna de las resoluciones incidentales

Apelación Parcial:

Artículo 328.- Los interesados pueden apelar de una parte de la sentencia, auto o decreto, y conformarse con lo demás.

Artículo 329.- En el caso de que se apele sólo por la condena en costas, deberá llevarse a efecto el fallo definitivo en lo principal y sus accesorios, por los méritos de la copia que se dejará, si lo solicita la parte interesada.

Ante quién se debe apelar:

Artículo 330.- La apelación se debe interponer ante el juez de cuya resolución se apela, y para ante el superior inmediato; pero no hay necesidad de expresar cuál es el juez o tribunal para ante quién se apela.

Los efectos de la apelación:

Artículo 331.- La apelación se puede conceder tanto en el efecto devolutivo como en el suspensivo, o solamente en aquél. Si se concediere en ambos efectos, no se ejecutará la providencia de que se hubiere apelado; y si se concediere sólo en el efecto devolutivo, no se suspenderá la competencia del juez, ni el progreso de la causa, ni la ejecución del decreto, auto o sentencia. En el segundo caso, el juez *a quo* remitirá el proceso original al inmediato



superior, y dejará, a costa del recurrente, copia de las piezas necesarias para continuar la causa.

Artículo 332.- Se concederá el recurso en ambos efectos en todos los casos en que la ley no lo limite al devolutivo.

Facultades del superior:

Artículo 333.- El juez que hubiere concedido el recurso de apelación, remitirá al superior el proceso, sin formar artículo y con la prontitud posible.

Artículo 334.- El juez para ante quien se interponga el recurso, puede confirmar, revocar o reformar la resolución apelada, según el mérito del proceso, y aún cuando el juez inferior hubiese omitido en su resolución decidir alguno o algunos de los puntos controvertidos. En este caso, el superior fallará sobre ellos, e impondrá multa de cincuenta centavos de dólar a dos dólares con cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América por esa falta.

Adhesión al recurso:

Artículo 335.- Si una de las partes hubiere apelado, la otra podrá adherirse a la apelación ante el juez *a quo* o ante el superior; y si aquella desistiere del recurso, ésta podrá continuarlo en la parte a que se adhirió.

Artículo 336.- Cuando son varias las personas interesadas en el juicio sobre un derecho común divisible, la apelación interpuesta por cualquiera de ellas no aprovecha ni perjudica a las demás.

Renuncia del recurso:

Artículo 337.- Si las partes renunciaren la apelación durante el pleito, los jueces no concederán ningún recurso. Las instituciones del Estado en ningún caso pueden renunciar a la apelación. Las sentencias judiciales adversas a las instituciones del Estado se elevarán en consulta a la respectiva corte superior, aunque las partes no recurran. En la consulta se procederá como en los casos de apelación y, respecto de ellas no se aplicarán las disposiciones relativas a la deserción de recurso.

Procedimiento en segunda instancia:

Artículo 338.- Se notificará a las partes el decreto en que se conceda o deniegue la apelación; y, en el primer caso, se dejará copia de la resolución apelada, a costa del recurrente, y se remitirán sin demora los autos al superior, apercibiendo a las partes en rebeldía.



Artículo 340.- Si la apelación versa sobre un auto o decreto, el ministro de sustanciación pedirá los autos y los pasará al tribunal, para que resuelva sin otro trámite, observando estrictamente el orden de antigüedad, según la fecha en que se hubiese recibido el proceso. Esta disposición es también aplicable a las sentencias dadas en los juicios ejecutivos y en los demás sumarios.

Artículo 341.- Si la apelación no se hubiere interpuesto en el término legal, el ministro de sustanciación devolverá los autos a la judicatura de primer nivel, para que se ejecute el fallo.

Artículo 342.- Cuando la resolución de segunda instancia fuere en todo conforme a la de primera, se condenará en costas al recurrente. Pero siempre que el superior conozca que hay mala fe en alguno de los litigantes, le condenará al pago de las costas de primera y segunda instancia, aunque el fallo sea revocatorio, y aunque haya interpuesto el recurso el que triunfó sin ellas en primera o se hubiese adherido a la apelación en segunda.

Como acabamos de observar de las normas antes transcritas se puede dilucidar que el tema de la apelación está plenamente tratado, a efectos de no generar inconvenientes a las partes procesales y no dilatar indebidamente los procesos.

El Recurso de Hecho: Benavente, establece que “el recurso de hecho tiene por objeto enmendar los agravios que el tribunal de primera instancia haya inferido a las partes al pronunciarse sobre su solicitud de apelación.”

Este recurso es la última oportunidad que tienen las partes cuando les ha sido negado el recurso de derecho oportunamente interpuesto.

Este recurso también se le conoce como negada apelación. Según el Dr. Machuca, es el medio de impugnación por el cual la parte procesal que ha sufrido la negativa del juez o tribunal a la concesión del recurso de apelación, puede llegar directamente a la instancia superior con su reclamo. El autor continúa estableciendo que en la doctrina se conoce como recurso de queja.

Enrique Vescovi sostiene que es un recurso ordinario concedido al litigante que ha deducido apelación y se agravia por la denegación de ésta. [...] la queja tiene como finalidad reparar el error respecto de la admisibilidad de una apelación.



El Código de Procedimiento Civil en su artículo 365 establece: Denegado por el juez o tribunal el recurso de apelación, podrá la parte, dentro del término de tres días, proponer ante el mismo juez o tribunal, el recurso de hecho.

En los siguientes artículos se establece como se procede con este recurso de hecho.

Artículo 366.- Interpuesto este recurso, el juez o tribunal, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, sin calificar la legalidad o ilegalidad del recurso, elevará el proceso al superior, quien admitirá o denegará dicho recurso. Para elevarlo, se notificará a las partes, con apercibimiento en rebeldía.

Artículo 367.- El juez *a quo* denegará de oficio el recurso de hecho: 1. Cuando la ley niegue expresamente este recurso o el de apelación; 2. Cuando el recurso de apelación o el mismo de hecho, no se hubiesen interpuesto dentro del término legal; y, 3. Cuando, concedido el recurso de apelación en el efecto devolutivo, se interpusiere el de hecho respecto del suspensivo. Al juez *a quo* que, sin aplicar este artículo, elevare indebidamente el proceso, se le impondrá una multa igual a la establecida para cuando se deniega el recurso de hecho.

Artículo 368.- El superior, por el mérito del proceso y sin otra sustanciación, admitirá o denegará el recurso; y, en el primer caso, confirmará, reformará o revocará la providencia recurrida.

Artículo 369.- Si el recurso de hecho fuere de sentencia expedida en juicio ordinario, y el superior lo admitiere, se procederá como en los casos de apelación. En este caso, se relatará dos veces la causa, con los efectos legales en cada una de ellas.

Artículo 370.- Si el superior denegare el recurso de hecho, condenará al recurrente al pago de costas y de multa de cinco a treinta dólares de los Estados Unidos de América. La multa se dividirá, por igual, entre la parte contraria y los gastos de justicia. Si la parte que interpuso el recurso desiste de él, ante el inferior o ante el superior, la multa será la mitad.

Artículo 371.- Si el superior denegare el recurso de hecho, no se podrá interponer otro; pero si lo admitiere y fallare sobre lo principal, podrá interponerse el de casación, si por su naturaleza lo permite la ley.

Artículo 372.- Si el superior, aceptado previamente el recurso de hecho, nota la omisión de alguna solemnidad sustancial que no pueda subsanarse, declarará la nulidad del proceso.



Sección 11a. Del desistimiento y del abandono de las instancias o recursos

Artículo 373.- La persona que ha interpuesto un recurso o promovido una instancia, se separa de sostenerlo, o expresamente por el desistimiento, o tácitamente por el abandono.

Recurso de Casación: Este tema será tratado más adelante en el presente trabajo.

En Derecho Comparado, existen algunos países como el Perú que tiene varias clases de medios impugnatorios. El autor Alberto Hinostroza Mínguez establece que según su ordenamiento procesal, los recursos se pueden clasificar de la siguiente manera:

- A) Remedios.
 - A1) Oposición
 - A2) Tacha
 - A3) Nulidad
- B) Recursos
 - B1) Reposición
 - B2) Apelación
 - B3) Casación
 - B4) Queja

Si bien existe cierta similitud con algunos de los medios impugnatorios que existen en la legislación ecuatoriana, también es evidente que hay unas cuantas diferencias.



CAPÍTULO III

Recurso de Casación Civil en la legislación ecuatoriana.

3.1. Casación: Generalidades:

En la legislación ecuatoriana, el Recurso de Casación es un medio de impugnación extraordinario contra sentencias de las salas de las cortes provinciales de justicia, en caso de que esas sentencias se hayan dictado contra la ley, la jurisprudencia, o los trámites sustanciales.

Este es un recurso extraordinario que se interpone ante el juez del tribunal o sala de la corte provincial cuando de manera previa se haya presentado apelación de la sentencia, para que éste sea resuelto ante la Corte Nacional de Justicia. Este recurso tiene por finalidad “casar” el error y subsanarlo.

La Casación, doctrinariamente, es un recurso de revisión simplemente porque no se pueden aportar nuevas pruebas, ni tampoco alegarse nuevos hechos. Si en esta revisión o examen que hace la Corte Nacional de Justicia, se encuentra una nulidad o defecto, se sustituirá el fallo o resolución por otra, restaurando así el imperio de la ley.

Según las Memorias del Primer Seminario Internacional: el Recurso de Casación en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia -donde participaron entre otros el entonces Presidente de la Corte Nacional de Justicia Carlos Ramírez Romero-, se establece que entre los medios impugnativos de la sentencia, el que ejerce más atracción para su estudio es el recurso de casación, por su especial naturaleza, su desenvolvimiento histórico y por su mismo destino futuro, ya que al igual que muchas de las ramas de las ciencias jurídicas, el derecho procesal se encuentra en constante desarrollo y actualización. (13)



Luis Cueva Carrión establece que la etimología de Casación proviene del término francés "*casser*" que significa: quebrar, romper, trincar⁷ y éste deriva del latín "*casso-are*" cuyos significado son: cesar, anular, abrogar, derogar, deshacer.

Sidonius Apollinaris, al término "*casso-are*", le da el siguiente significado extensivo: refutar victoriosamente.

Etimológicamente, y aplicada al mundo jurídico, la casación tiene por objeto: romper, abrogar, deshacer, anular una sentencia dictada por el tribunal de apelación, en base a los errores legales en que se ha incurrido.

Por la casación, se deja sin efecto, se anula, se abroga, se deshace una sentencia y ésta deja de existir; en consecuencia, no produce ninguno de los efectos jurídicos establecidos por los inferiores. (45)

En las referidas Memorias, se indica que históricamente se ha hecho de la casación una institución jurídica capaz de unificar la interpretación de las normas y, como tal, de favorecer a la seguridad jurídica y al derecho a la igualdad. La casación ha sido el mecanismo de defensa de las más altas expresiones de derecho. Pese a sus importantes aportes, la casación ha permanecido casi de manera inmutable en nuestro sistema jurídico. Esta condición que ha caracterizado a la casación, a través del sistema monárquico, legalista-positivista, constitucional, social de derecho, debe ser repensada para mantener sus beneficios dentro de los sistemas constitucionales contemporáneos. De ahí que, dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia, la casación no podría sino constitucionalizarse, redefinirse y renovarse a favor de los derechos y de las garantías fundamentales. (13)

7

Trincar, que también corresponde a la traducción del término francés "*cas- ser*", significa: partir o desmenuzar en trozos. Jurídicamente equivale a romper o a quebrar una sentencia.



Alberto Hinostroza Mínguez expresa que el recurso de casación es aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario en supuestos estrictamente determinados por la ley y dirigido a lograr que el máximo tribunal (Corte Nacional de Justicia) revise y revoque o anule las resoluciones expedidas por las Salas de las Cortes Provinciales como órganos de segundo grado (que pongan fin al proceso), que infringen normatividad material o procesal a tal punto que la referida infracción incide directamente en la parte decisoria de la resolución de que se trate, provocando así un fallo ilegal, irregular, indebido o injusto.

A través del recurso de casación se fiscaliza, por un lado, el quehacer judicial en la aplicación de la ley, y, por otro, se salvaguarda la uniformidad de ésta y la de la jurisprudencia nacional, resultando un instrumento de gran utilidad para lograr la seguridad jurídica y la igualdad de las personas ante la ley. Sirve, entonces, el recurso de casación, no para cautelar simplemente intereses particulares y específicos de las partes, sino principalmente para velar por la correcta aplicación del derecho objetivo y la integridad del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia nacional vinculante, cumpliendo así una función protectora del interés público. (548 y 549)

3.2. Antecedentes históricos:

Algunos autores establecen que el recurso de Casación tiene su origen más remoto en la *Querella Nulitatis*, que constituía un remedio extremo y que permitía la anulación de las sentencias no atacables de otra manera.

El doctor Káiser Machuca establece que el recurso de casación tiene como antecedentes históricos las siguientes instituciones:

1. La *Provocatio ad Populum* o derecho a recurrir al pueblo reunido en comicios.



2. El *Restitutio in Integrum* del derecho Justiniano, a fin de que sea revocada la sentencia y sean restituidas las cosas al estado anterior.
3. La *supplicatio* o suplica de justicia.
4. La *querella nulitatis* vigente dentro del proceso Estatutario (fruto de la fusión de los derechos romano y germánico) que permitía anular las sentencias *contra iuri* por errores *in procedendo* (de procedimiento) que no eran atacables o impugnables por otro medio.
5. El recurso de injusticia notoria, vigente a finales de la Edad Media en España.
6. Otros con breve analogía como el recurso de segunda suplicación.
7. Recurso de mil quinientas, en conflictos de cuantía superior a los mil quinientos doblones.

El autor continúa estableciendo que a partir de la Revolución Francesa, la casación se perfecciona como una institución con caracteres propios, que a través del Tribunal de Casación adscrito al Poder Legislativo, busca anular los procedimientos en los que las formas habían sido violadas y las sentencias que contravinieren expresamente el texto de la ley, a más de propender al respeto de la separación de los Poderes y concretamente para que el Poder Judicial no atente a las funciones propias del Legislativo. Un memorial señalaba que, "En la cima del poder judicial, debe existir un tribunal cuyas luces hagan ver a los demás, el respeto de que la ley es digna y les impida que se separen de ella...". Sin embargo es necesario reconocer que la casación francesa estuvo influenciada por factores políticos orientados a mantener la supremacía del Poder Legislativo sobre el Judicial, antes que defender la ley y el interés de los particulares. Así los primeros ejemplos de casación, se dan con relación a conflictos entre el monarca y los Parlamentos.

En América y en tiempos de la Gran Colombia, el Libertador Simón Bolívar propuso la creación de una Alta Corte de Justicia integrada por dos salas, una de apelación y otra de casación. Este recurso se incorpora en nuestra



legislación procesal civil a través de la Ley de Casación promulgada el 18 de mayo de 1993, reformada en abril de 1997 y codificada en marzo del 2004.

Para el autor Calamadre, el origen de la Casación fue en la Revolución Francesa. Este autor establece que fue precisamente en los últimos años del siglo XVIII cuando se produce el nacimiento de la casación por medio de un decreto de la Asamblea revolucionaria. La afirmación de Calamadre de que “no se puede buscar el origen de algo con anterioridad de su nacimiento” en este caso no es aplicable, pues hay que tener presente que la casación resulta de la unión de dos institutos, que se compenetran e integran: Corte de Casación y Recurso de Casación. Un aspecto orgánico político judicial y otro procesal. Esta estructura y procedimiento son anteriores incluso a la Asamblea Nacional francesa. Es por ello que en la casación existirá elemento que tendrán sus raíces en siglos anteriores. (25-29)

Cueva Carrión considera que la casación, como categoría jurídica, fue creada por los franceses; ellos la introdujeron por vez primera en la ciencia jurídico-procesal. Al término "casación" lo tomaron de la lengua latina donde tenía el significado general de quebrantar o anular. (45)

La Ilustración francesa constituye el origen de la casación moderna, aunque sus orígenes se remontan al derecho romano, época en la que se concibió su idea. Para Calamandre, la casación como institución procesal se desarrolló en tres etapas fundamentales: a) la idea de origen romano, por la cual una sentencia injusta, resultado de un error de derecho, debe considerársela de mucha gravedad; b) la concesión a las partes de un remedio diverso de los demás otorgados para el caso de simple injusticia; y c) la incorporación como motivo de recurso de los errores *in procedendo*. (13)



3.3. Concepto:

Para Escriche la casación consiste en la acción de anular y declarar de ningún valor ni efecto algún acto o instrumento. Similar definición hace Cabanellas en su diccionario jurídico.

Escriche define a la casación en forma muy general, por eso, para él, mediante la casación, se puede declarar sin valor un acto o un instrumento jurídico. Para este autor no solo está sujeta al recurso de casación una sentencia judicial, sino todo acto o instrumento de carácter jurídico que fuere parte de un proceso y en cuya formulación se hubiere contravenido a ley expresa.

Caravantes en cambio, se ubica en un plano específico y concreto y enseña que la casación "Es un medio supremo y extraordinario contra las sentencias ejecutoriadas de los tribunales superiores, dictadas contra la ley o doctrina admitida por la jurisprudencia, o faltando a los tramites del juicio.

Chiovenda, define al recurso de Casación de la siguiente manera: "el recurso de casación es el medio de provocar el juicio de la Corte Suprema, sobre la sentencia denunciada, en los límites fijados por el recurso mismo."

Miguel Fenech sostiene que, el recurso de casación es un "acto de impugnación que tiende a provocar un nuevo examen limitado de una resolución de carácter definitivo recaída en un proceso para conseguir su anulación total o parcial, con o sin reenvío a nuevo juicio, fundado en una infracción de Derecho Material o del Derecho Procesal positivo taxativamente establecida en la ley"

Calamandrei define, al recurso de casación, en una forma sencilla y practica "El recurso de casación es el medio procesal para hacer valer contra una sentencia una acción de anulación autónoma, distinta de la acción hecha valer en el juicio de mérito acerca de la cual decidió la sentencia que se quiere anular."



Para el doctor Machuca, la casación es un recurso formal, extraordinario y supremo con el que se ataca a un auto o sentencia, por vicios de derecho inmanentes al proceso, y que se fundamenta en una o más causales establecidas en la ley.

Para la Corte Constitucional del Ecuador, "La casación es un recurso extraordinario cuya finalidad es anular una sentencia judicial por fundamentarse en: una incorrecta interpretación o aplicación de la ley; o que ha sido dictada con un procedimiento que no cumple las solemnidades legales. Es un fallo de un Tribunal Superior de Justicia y por ello de mayor jerarquía. Su objetivo es obtener la aplicación correcta de la ley por los Tribunales, como garantía de seguridad y certeza jurídica al unificar la interpretación de las leyes y crear jurisprudencia. Las causales para su procedencia son: infracciones al procedimiento, esto es errores de forma o error *in procedendo*⁸ e infracciones de derecho, o errores de fondo o error *in iudicando*⁹. (Suplemento del Registro Oficial No 97, de 29 de diciembre pág. 69)

3.4. Clases:

El tratadista Luis Cueva Carrión dice que los tratadistas que han estudiado la casación no se refieren en forma sistémica a las clases de casación; algunos ignoran esta materia muy importante y otros la aluden en forma accidental a solo algunas clases. Continúa diciendo " nosotros damos la importancia debida

⁸ Según Alberto HinostrozaMinguez los vicios o errores in procedendo, llamados también vicios de actividad o infracción en las formas, constituyen irregularidades o defectos o errores en el procedimiento, en las reglas formales.

⁹ Alberto HinostrozaMinguez los vicios o errores in iudicando, denominados también vicios del juicio del tribunal o infracción en el fondo o error de derecho, configuran irregularidades o defectos o errores de juzgamiento, esto es, en la decisión que adopta el magistrado. Tales vicios implican la violación u omisión del derecho o de la ley (o de la doctrina jurisprudencial) aplicable al asunto controvertido.



a esta parte de nuestra investigación y nos referimos, en forma completa, a todas las clases de casación existentes”. Así existen las siguientes clases:

- a) Casación de Fondo:** Tiene íntima relación con el denominado error *in iudicando*; es la casación en la cual se resuelve acerca de los errores de derecho que el juzgador ha cometido en el auto o en la sentencia ya por falta de aplicación, por aplicación indebida o por errónea interpretación de las normas de derecho o de la jurisprudencia obligatoria. En otras palabras: la casación de fondo corrige los errores cometidos por el inferior en la función intelectual de las normas jurídicas aplicables al caso que debe juzgar.

En este caso la Corte de Casación dicta una nueva sentencia con los mismos materiales del inferior, pero, introduce un nuevo juicio lógico-jurídico y aplica la normatividad jurídica exacta.

- b) Casación de Forma:** La casación de forma se relaciona con los errores *in procedendo*. Aquí la Corte de Casación se pronuncia sobre la falta de aplicación, por aplicación indebida o por errónea interpretación de las normas procesales que determinan la nulidad del proceso porque vician la relación jurídica procesal.

En este caso la Corte anula una parte del proceso y, mediante el reenvío, dispone que el inferior reponga la parte anulada. La Corte no dicta sentencia de fondo.

- c) Casación total:** La casación es total cuando la sentencia de la Corte de Casación anula en forma íntegra la pronunciada por el interior y no deja con vigor extremo alguno de ella.
- d) Casación parcial:** Pertenece a esta clase la casación en la cual la Corte anula alguna parte de la sentencia denunciada y deja en vigor lo demás de ella.



- e) *Casación interdependiente*: No debemos perder de vista que la sentencia es un todo, es un subsistema, por lo tanto, sus partes deben guardar íntima relación y armonía entre sí y con el proceso.

Ahora bien: se afirma que la casación es interdependiente cuando al anular alguna parte de la sentencia también se anula lo demás o un sector de ella, porque, por la relación que tiene como un todo, la parte anulada afecta también a los demás. Nótese bien que existe interdependencia cuando la anulación de una parte de la sentencia obliga a anular lo demás de ella, a tal punto que esta no será anulada si no sufriera anulación la otra parte de la sentencia

- f) *Casación expresa*: Es expresa la casación cuando en forma directa se dispone la anulación de la sentencia.
- g) *Casación tácita*: Pertenece a esta clase de casación aquella por la cual la Corte de Casación, al anular una parte de la sentencia, se subentiende anulada también otra u otras partes de la misma, por la relación de interdependencia que existe al interior de ella.
- h) *Casación incidental*: Chiovenda es quien reconoce a ésta como a la siguiente clase de casación, cuando [...] sostiene que: Falta en la casación en primer lugar, la institución del recurso incidental y por lo tanto, si la sentencia perjudicase también al recurrido, por haberle sido desfavorable en la parte, deberá proponer por su lado, dentro del término, recurso principal. En segundo lugar, no puede defenderse sino en el mismo terreno del recurso; en consecuencia, si de sus excepciones encaminadas todas al mismo resultado práctico fueron acogidas unas y rechazadas otras, no puede pedir que sea rechazado el recurso en razón de las no estimadas; podrá únicamente, en caso de que sea acogido el recurso reproducir en el juicio de devolución las excepciones que fueron rechazadas.



- i) *Casación condicionada*: El insigne Chioyenda caracteriza así a esta clase de casación: “La práctica admite un recurso condicionado; - afirma- se le permite al recurrido pedir, con tal que sea dentro del término y con las formas establecidas para el recurso principal, que de ser casada la sentencia por razón de haber estimado sus excepciones, lo sea igualmente por razón de haber desestimado las otras”
- j) *Casación “per saltum”*: La casación “*per saltum*” tiene lugar en los casos en que las partes, expresamente, renuncian a interponer el recurso de apelación y, en su lugar, interponen el recurso de casación directamente la Corte de Casación, en el Ecuador, ante la Corte Nacional de Justicia.

El procedimiento para interponer esta clase de casación es la siguiente: se la interpone una vez que se ha obtenido sentencia de primera instancia a la cual, por convenio de las partes, se le da el carácter de definitiva.

Recibe el nombre de casación *per saltum* porque se funda en el salto de la primera instancia hacia la Corte de Casación pasando por alto al tribunal de segunda instancia que, por renuncia de los justiciables, no llega a conocer el proceso en segunda instancia.

Este tipo de casación posee características propias: procede contra la sentencia de primera instancia, es de carácter excepcional y se basa en el interés mutuo de las partes que renuncian al recurso de apelación.

La casación *per saltum* tiene por objeto acelerar la administración de justicia porque las partes se ahorran toda una instancia que en la mayoría de los casos, no tiene otro efecto que retardar el curso de



los procesos con perjuicio evidente para una de las partes contendientes

- k) Casación por razón de la materia:** Esta clase de casación tiene relación con la clasificación general del derecho sustantivo. Por razón de la materia la casación puede ser: civil, penal, laboral, tributaria, mercantil, contencioso administrativa etc. (89 y ss.)

3.5. Causales:

Las causales por las que se puede interponer el recurso de casación están establecidas en el artículo 3 de la Ley de Casación que con el siguiente texto:

“Causales.- El recurso de casación sólo podrá fundarse en las siguientes causales:

1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva;

2da. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente;

3ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto;

4ta. Resolución, en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de resolver en ella todos los puntos de la Litis; y,



5ta. Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o en su parte dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles.”

Se establece que, al decir en el encabezado “El recurso de casación sólo podrá fundarse en las siguientes causales”, se hace una enumeración taxativa de las causales por lo que no se podrá fundamentar en otra causal que no esté dentro de este artículo.

Luis Cueva Carrión dice que, las causales del recurso de casación civil solamente son las que constan en el artículo 3 de la Ley de Casación; no existen otras, ni en la misma ley ni en ninguna otra. (233)

Si se revisa la redacción de las tres primeras causales, en su contenido tienen a su vez tres causales en cada una de ellas, que son: 1) Aplicación indebida, 2) falta de aplicación, 3) errónea interpretación. Según el doctor Machuca, estas causales son excluyentes entre sí, por ser estados jurídicos incompatibles.

- 1) Aplicación indebida: Se da cuando el juez hace una incorrecta adecuación de la norma prevista para un caso, a otro que no corresponde. Hay una indebida aplicación de la premisa mayor del silogismo. Es un error de acción.
- 2) Falta de Aplicación: Se da cuando el juez ha dejado de aplicar al caso, una o más normas sustanciales que debía aplicar. Es un error de omisión o existencia.
- 3) Errónea Interpretación: El sentido y alcance que le da el juez a la norma es incorrecto. El supuesto fáctico del caso no se subsume en la norma. Es un error de acción, es un error hermenéutico.

Revisando el numeral 1 del artículo 3 de la Ley de Casación el autor Cueva Carrión pregunta: según esta causal ¿qué instrumentos jurídicos pueden ser violados? Para que proceda el recurso de Casación es necesario que se



hubieren violado: a) las normas de derecho; o, b) los precedentes jurisprudenciales obligatorios.

El primero es el producto genuino de la Función Legislativa y, el otro lo es de la Función Judicial y, actualmente también, de la Corte Constitucional. Por lo tanto, constituye causa de casación el violar uno u otro producto. (233)

El mismo autor, al revisar la segunda causal establece que en lo principal esta segunda causal de casación contiene los mismos submotivos de casación de la primera, pero, con referencia específica a las normas procesales, es decir al derecho adjetivo. (270)

Con relación a la tercera causal Cueva señala que ésta se refiere a las incorrecciones, defectos e injusticias que el juez comete en el momento de valorar la prueba. Esta es la parte mas delicada y técnica del proceso, puesto que en torno a este acto gira la resolución final que adopta el juez. La valoración de la prueba constituye el requisito *sine qua non* de la sentencia o del auto que pronuncia el juez para concluir el proceso, es la antesala del acto final exclusivo del juzgador. Por lo tanto, entre la valoración de la prueba y la resolución, hay una relación de dependencia de la valoración hacia la resolución, por lo que este acto debe ser realizado con especial responsabilidad y con conocimientos técnico-jurídicos de muy elevados quilates. Además, por estas mismas razones, la Ley protege a este acto de carácter axiológico al propiciar la interposición del recurso de casación si el mismo no lo hubiera sido realizado en la forma y bajo las condiciones establecidas por el Código de Procedimiento Civil.

En síntesis, esta causal de casación protege a las partes de cualquier arbitrariedad que el juez pudiere cometer en el momento mismo de la valoración de la prueba. (277)



Al referirse a la cuarta causal, el autor antes mencionado establece que la causal cuarta está concebida en la forma siguiente: el recurso de casación también opera cuando, en la sentencia o el auto, el juez resuelve sobre lo que no fue materia del litigio u omite resolver todos los puntos de la *litis*.

Aquí se encuentra frente a uno de los abusos más frecuentes que ocurren en las judicaturas. Frecuentemente, el juez, se excede en el auto o en la sentencia y resuelve sobre lo que no fue pedido en la demanda ni en la contestación a la demanda (*extra petita*); o, también, omite pronunciarse sobre todos los puntos que fueron materia de la *litis*, entonces, resuelve solo unos y otros no (mínima o *cifra petita*). En ambos casos hay un exceso de poder del juez; un abuso de la autoridad de la que se encuentra investido. Cuando esto ocurre, tiene lugar el recurso de casación. (320)

Finalmente, sobre la causal quinta, Cueva Carrión establece que, de conformidad con esta causal, procede el recurso de casación cuando “la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos en la ley”; es decir, en el caso de falta de requisitos legales en la sentencia o en el auto. (327)

3.6. Requisitos:

La Ley de Casación en su artículo 6 establece los requisitos formales que se deben cumplir para interponer este recurso.

En el escrito de interposición del recurso de casación deberá constar en forma obligatoria lo siguiente:

1. Indicación de la sentencia o auto recurridos con individualización del proceso en que se dictó y las partes procesales;
2. Las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades del procedimiento que se hayan omitido;
3. La determinación de las causales en que se funda; y,



4. Los fundamentos en que se apoya el recurso.

Aparte de estos requisitos, el doctor Machuca establece que el recurso de casación es formal, lo que lleva al recurrente a cumplir y a los tribunales de instancia y de Casación a calificar técnicamente si concurren los siguientes requisitos a fin de admitirlo a trámite o negarlo:

- a) Que el recurrente este legitimado activamente para interponerlo.
- b) Que la providencia recurrida sea un auto o sentencia dictado en un proceso de conocimiento por una sala de las Cortes Provinciales o Tribunales distritales
- c) Que se lo haya deducido dentro del término legal.
- d) Que el escrito de fundamentación cumpla de manera imperativa con los requerimientos enumerados en el artículo 6 de la Ley de Casación.
(anunciado previamente)

3.7. Características e Importancia:

Importancia.-

Para establecer la importancia de la casación, hay que remitirse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que señala en su articulado lo siguiente: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme lo prescrito por la ley.”

La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 amplió este artículo al regular las garantías procesales mínimas, y establece que toda persona y en condiciones de plena igualdad, tiene el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. Es decir, se puede recurrir por todas las



partes, en condiciones de plena igualdad, ante un tribunal de jerarquía superior y no exclusivamente a fallos condenatorios, sin pronunciarse.

Algo muy importante de la casación es que no es una instancia más, debido a que la instancia surge del principio de contradicción mientras que la Corte Nacional de Justicia conoce de las sentencias y autos respecto de los cuales se ha interpuesto el recurso de casación, pero cuando existen errores de derecho, ya no se trata de examinar las pretensiones de las partes sino lo hecho por el juez o tribunal.

El recurso de casación es de naturaleza extraordinaria y se lo ha instituido históricamente con miras a mantener una estricta y exacta observancia de la ley, este recurso es de competencia del máximo órgano de justicia.

Con este recurso se busca precautelar que en los procesos los jueces actúen pegado a la ley, ya que a través de él, el proceso será revisado con el fin de determinar si existen defectos en las conclusiones o razonamiento de derecho a los cuales han llegado los jueces y tribunales y que han sido el fundamento para dictar la sentencia o el auto que motivó la casación.

Un aspecto de importancia que no hay que dejar de lado es la publicación en el Registro Oficial de los fallos de casación dictados por la Corte Nacional de Justicia, ya que, según el doctor Santiago Andrade Ubidia, esa publicación es el medio idóneo para que pueda realizarse el control democrático de la actuación de los jueces, lo cual al mismo tiempo constituye el mecanismo de legitimación tanto de los jueces individualmente, como de la propia Función Judicial. El autor establece que la responsabilidad de magistrados y jueces se establece a través de la fundamentación de sus fallos, lo cual, a su vez, es el mecanismo de legitimación funcional.



Características.-

Sergio Muñoz Gajardo en las Memorias del Primer Seminario Internacional antes señalado, sostiene que el recurso de casación tiene varias características, de entre las cuales se destacan:

1. *Jurisdiccional*: Es un mecanismo de carácter jurisdiccional, que actualmente en algunos países incorpora el resguardo expreso de garantías constitucionales.
2. *Garantía procesal*: tiene por fundamento revisar si en un juicio preciso y determinado se observaron las garantías de las partes, que se aplicó correctamente el procedimiento y la legislación que resuelve el caso.
3. *Puede afectar el procedimiento y la sentencia*: El objeto concreto que se pretende es invalidar el procedimiento o la sentencia, pero solo en los casos determinados por la ley, en el evento que se infrinjan garantías, se aparte del procedimiento establecido por la ley o se decida la controversia con infracción de las normas de derecho.
4. *Generalmente anula el procedimiento*: Como norma general, de acogerse un recurso de nulidad por vicios formales o de procedimiento, se pretende anular el juicio y se proceda a su repetición. Excepcionalmente, como competencia asociada al recurso de nulidad, que no lo integra doctrinariamente, se concede la competencia para dictar sentencia de remplazo de acuerdo a lo que es correcta aplicación de la ley, de ser necesario.
5. *Extraordinario*: Tiene un carácter extraordinario, porque no procede respecto de toda resolución judicial, sino de las que están delimitadas precisamente por el legislador, como los fundamentos por los que puede interponerse el recurso.



6. *De derecho estricto*: Su naturaleza de derecho estricto se constata en las distintas formalidades que corresponde satisfacer en su interposición y tramitación, que de no cumplirse produce la declaración de inadmisibilidad de la impugnación. Además procede solamente por causales específicas y determinadas.
7. *De reforma*: Como el conocimiento del recurso no está entregado al mismo tribunal, evento en el cual correspondería calificarlo de retractación, sino que a uno diverso, en que la nueva decisión importará una reforma de la anterior.
8. *Se interpone ante el tribunal que dictó la resolución impugnada*: Se precisa que es competente para recibir la impugnación aquel que extendió la sentencia y decidió el juicio.
9. *Conoce del recurso un tribunal superior*: La competencia para tramitar, conocer y decidir el recurso generalmente será de la Corte o Tribunal Supremo. En algunos países existe una Cámara especial y en otros se permite que sean tribunales colegiados locales de segunda instancia.
10. *Otorga competencia excepcional a la Corte Suprema¹⁰*: Dentro de la orgánica, se puede consultar, que en el evento que pueda conocer del recurso de Casación un tribunal de segunda instancia.
11. *Invariable*: Quedan fijados los límites de la impugnación con la interposición del recurso, luego de lo cual los motivos y causales son inamovibles.
12. *Medio de Impugnación*: Atendido que corresponde a una respuesta jurisdiccional, en que la facultad de proceder de oficio está

10

L a Corte Suprema hoy se la conoce como Corte Nacional de Justicia



ostensiblemente limitada y no procede la *Reformatio in peius*, corresponde a lo que la doctrina denomina un medio de impugnación y no de gravamen, pues la decisión no podrá ser más gravosa para la única recurrente o exceder lo solicitado por los demás que alzan en contra de la resolución.

13. Legal: es un remedio procesal establecido por el legislador, no por el ordenamiento constitucional, aunque el numeral 1 del artículo 184 de la Constitución de la República asigna como función de la Corte Nacional el conocer los recursos de casación.

14. Definitivo: No puede ser objeto de otras impugnaciones, no se contemplan recursos para la sentencia que resuelve el recurso de nulidad, sin perjuicio que la decisión tenga importancia si se repite el juicio. Esto debe entenderse dentro de la propia Función Judicial, pues la acción extraordinaria de protección se interpone ante la Corte Constitucional.

15. Por regla general se dispone la improcedencia de la interposición conjunta o subsidiaria: El legislador no ha contemplado la posibilidad de interponer en un mismo escrito o en otros diversos el recurso de casación con otras acciones de impugnación o recursos, ya sea de manera conjunta, principal o subsidiaria. En algunos países es posible cuando se diferencia entre recursos por vicios *in procedendo* y vicios *in iudicando*.

16. No constituye instancia: En atención al antecedente que el tribunal *ad quem* no conoce de todas las cuestiones de hecho y de derecho, no puede estimarse como una nueva instancia, dado que solo comprenderá los aspectos en que se funda la impugnación y al momento de interponerse el recurso. Además, en principio, el



conocimiento y decisión del recurso no importa la revisión de los hechos.

17. Irrenunciable: la renuncia constituye la manifestación de la voluntad de no ejercer un derecho de manera anticipada, con anterioridad al evento en el cual se está en condiciones de ejercerlo. Por la naturaleza de derecho público del derecho procesal, sus normas deben ser observadas perentoriamente bajo sanción de nulidad, de modo que las convenciones que tiene por fundamento evitar dicha sanción, que tienen por efecto privar de eficiencia al procedimiento no resulta permitido, pues con ello se posibilita se adopten procedimientos distintos al legal. (99 y ss.)

3.8. Recurso de Casación en Juicio Ejecutivo:

3.8.1. Análisis Doctrinario:

El artículo 185 de la Constitución de la República establece que “Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al pleno de la Corte a fin de que ésta delibere y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o si ratifica el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria.

La jueza o juez ponente para cada sentencia será designado mediante sorteo y deberá observar la jurisprudencia obligatoria establecida de manera precedente. Para cambiar el criterio jurisprudencial obligatorio la jueza o juez ponente se sustentará en razones jurídicas motivadas que justifiquen el cambio, y su fallo deberá ser aprobado de forma unánime por la sala.”

Según Luis Cueva Carrión, existen ciertos autos y sentencias que no son casables; entre otras está la sentencia dictada en juicio ejecutivo. Señala también que cuando en 1997 se reformó la Ley de Casación y se introdujo la



categoría jurídico-procesal denominada "juicio de conocimiento", se creó la duda de si el juicio ejecutivo era o no juicio de conocimiento. "Nosotros sostuvimos y aun mantenemos las siguientes tesis: para saber si nuestro juicio ejecutivo es o no juicio de conocimiento se debe averiguar si existen excepciones al contestar la demanda.

Si no existen, es juicio de ejecución y no de conocimiento.

En cambio sí, al contestar la demanda, se presentan excepciones, tales como: pago parcial o total; falsedad del documento aparejado a la demanda; aumento de la deuda original y otras, nuestro juicio ejecutivo deja de ser tal y se convierte en un auténtico juicio de conocimiento luego del cual el juez debe decidir el derecho y establecer o no la obligación y aun pronunciarse sobre la verdadera cuantía, etc.

La segunda tesis nuestra deriva del siguiente problema: contra la sentencia dictada en el juicio ejecutivo que más tarde se convierte en juicio de conocimiento ¿cabe el recurso de casación?

Afirmamos que no, porque la sentencia no es final ni definitiva por lo que dispone el artículo 448 del Código de Procedimiento Civil." (207 y ss.)

El doctor Santiago Andrade Ubidia al respecto de este tema establece que, desde a promulgación de la Ley, se dudó respecto a la procedencia del recurso extraordinario en los procesos que, de acuerdo con la doctrina procesal, no son de conocimiento. El Dr. Jorge Zavala Egas, uno de los autores del anteproyecto, respecto de las sentencias dictadas dentro de los juicios ejecutivos, sostuvo: mayor duda alcanza el caso de las sentencias expedidas en juicio ejecutivo que serán finales al ser dictadas por los jueces de última instancia, pero dudo mucho que se puedan considerar definitivas, dada la posibilidad de su ulterior revisión en juicio ordinario que permite el 448 del Código de Procedimiento Civil¹¹.

11

Art. 448.- El acreedor no podrá ser pagado antes de rendir fianza, de conformidad con la



En la exposición de motivos al veto a la Ley Reformativa, el señor Presidente Constitucional de la República expresó: El veto parcial se basa en los siguientes razonamientos: 1.- Art. 2 de la reforma: a) las únicas sentencias y autos susceptibles de casación son aquellas que resuelven puntos de derecho y respecto de los cuales no existe la posibilidad procesal de volver a discutir: en definitiva, tal cosa ocurre solamente en los procesos de conocimiento, es decir, dentro de nuestro sistema procesal civil los que se sustancian por las vías ordinaria y verbal sumaria. Actualmente se abusa del recurso en una forma muy preocupante, especialmente en los juicios ejecutivos, que son aquellos, en los que se da cumplimiento a lo dispuesto por el acto anterior como título de ejecución norma, es decir, en los que el recurso de casación se ha convertido en un mecanismo para postergar indebidamente el cumplimiento de las obligaciones. Por lo tanto es necesario limitar el recurso en este sentido. Por ello se sugiere principalmente aumentar en el artículo 2 de la reforma después de la palabra «procesos» la frase «de conocimiento»

Como se advierte, dos razones de gran peso inspiraron el veto: a) una, de orden científico, relativa a la naturaleza de los procesos ejecutivos; y b) otra, de orden práctico, que el recurso extraordinario rápidamente se utilizó en forma desviada, como medio para demorar la ejecución de las sentencias, desvirtuando por completo y corrompiendo al recurso. No cabe duda que la fuerza de convicción de estos razonamientos determinó que la Comisión Legislativa Permanente se allane al veto en el punto señalado.

ley y a satisfacción del juez, por los resultados del juicio ordinario, siempre que lo solicite el deudor, manifestando que tiene que intentar la vía ordinaria. En este caso, no se admitirán las excepciones que hubieren sido materia de sentencia en el juicio ejecutivo. En subsidio de la fianza, puede el acreedor pedir que, mientras se tramita el juicio ordinario, el dinero se deposite, de acuerdo con la ley. Si el deudor no intentare la vía ordinaria dentro de treinta días, contados desde que se verificó el pago, o la suspendiere por el mismo término, quedará prescrita la acción y se mandará cancelar la fianza.



Desde antes de que se dictara la Ley, ya hubo el criterio de que no era procedente el recurso extraordinario. En efecto, el proyecto elaborado por la Corte Suprema de Justicia, en el artículo sustitutorio del 350 del Código de Procedimiento Civil se disponía: "No ha lugar al recurso de casación: 1.- Contra la sentencia y demás providencias dictadas en el juicio ejecutivo, sin perjuicio de lo previsto en el numeral tres del artículo anterior, o sea de las que, dictadas para ejecutar sentencias, resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en el fallo, o que contradigan lo ejecutoriado.

Igualmente, en el plano académico apenas vigente la ley, en 1993, se formuló la misma objeción, y hasta hoy día se mantiene el debate, existiendo juristas que estiman que en algunos casos el juicio ejecutivo es de conocimiento.

Al inicio de la vigencia de la reforma de 1997, hubo alguna discrepancia de criterios, pero finalmente las tres Salas de lo Civil los unificaron en el sentido de que no cabe el recurso extraordinario respecto de las sentencias dictadas dentro de los juicios ejecutivos, por no ser procesos de conocimiento sino de ejecución, ya que los fallos dictados dentro de estos juicios únicamente producen efecto de cosa juzgada formal pero no material ya que se puede replantear la litis por el demandado vencido, en juicio ordinario, al tenor de lo que dispone el artículo 448 del Código de Procedimiento Civil, y el actor vencido igualmente en proceso de conocimiento invocando la relación causal. Existen fallos de triple reiteración en este sentido.

El doctor Santiago Andrade Ubidia, ex-magistrado de la ex-Corte Suprema de Justicia continúa diciendo, que no obstante de lo anterior, la segunda Sala se ha pronunciado en el sentido de que, únicamente la letra de cambio, el pagaré a la orden y el cheque, así como la escritura pública en que se apoya y refiere específicamente a éstos, son documentos formales, que tiene protección especial de la ley, que hace que las obligaciones de dar consignadas, sean derechos preestablecidos, cuyo titular puede exigir inmediatamente su ejecución y cumplimiento. Basta, reparar [...] el Código de Comercio, y la Ley



de Cheques¹², para descubrir ese elemento distintivo que les ha consagrado el legislador, a diferencia de los otros títulos ejecutivos así: la confesión¹³; la sentencia que goza del efecto de cosa juzgada y la sentencia firme extranjera, las escrituras públicas; el documento privado reconocido judicialmente; el testamento, el auto de ejecución de remate de bienes muebles o inmuebles; las actas judiciales de remate, las actas transaccionales en instrumento público o reconocidas judicialmente; y los demás documentos a los que leyes especiales conceden tal carácter, deben ser en forma previa apreciados por el juez, llegando aun a efectuarse manifiestamente la declaratoria judicial, a fin de que recién puedan las obligaciones contenidas, reclamarse ejecutivamente; distinto de las tres órdenes de pago y los otros documentos comerciales establecidos de manera taxativa en la ley, en que la presunción de autenticidad que revisten, solo es destruida por la falsedad o ilegalidad probada.

Como se advertirá, se está distinguiendo entre los juicios cambiarios, que se fundan en títulos valor y los demás juicios que se fundan en los otros documentos que tienen el carácter de ejecutivos, de conformidad con lo que disponen los artículos 413 y 414 del Código de Procedimiento Civil. En la doctrina y en muchas legislaciones, se sostiene que los títulos valor dan origen al juicio cambiario, una especie del juicio ejecutivo, en el cual no se discute sino lo atinente a los vicios de forma del título y a los hechos que puedan afectarles producidos con posterioridad a su nacimiento; esta tesis es perfectamente sustentable en el Ecuador en razón de lo que dispone el inciso primero, del artículo 229 de la Ley de Mercado de Valores, que dice:

“Los valores a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, tienen el carácter de títulos valor, en consecuencia, incorporan un derecho literal y autónomo que se

¹²Actualmente está derogada la ley de Cheques, y las normas respecto a los cheques encontramos en el Código Orgánico Monetario y Financiero.

¹³Art. 122 C.P.C.- Confesión judicial es la declaración o reconocimiento que hace una persona, contra sí misma, de la verdad de un hecho o de la existencia de un derecho. La parte que solicite confesión presentará el correspondiente pliego de Posiciones, al que contestará el confesante.



ejercita por su portador legitimado según la Ley, constituyen títulos ejecutivos para los efectos previstos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Se presume, salvo prueba en contrario, su autenticidad así como la licitud de su causa y la provisión de fondos.”

Uno de los puntos de la discusión es el relativo a si se mantiene o no la actual limitación de la procedencia del recurso a solamente los procesos de conocimiento, o si se abre totalmente las puertas para que accedan al recurso extraordinario todos procesos de ejecución, o si se prevén ciertos casos de juicios ejecutivos, sea por la naturaleza del título en que se fundan las acciones, sea porque el proceso ejecutivo se desvirtúa y convierte en proceso de conocimiento en razón de las excepciones propuestas por los demandados. Posiblemente sea tiempo de realizar una reforma a la ley, abriéndose parcialmente la puerta al recurso de casación para los procesos ejecutivos que se hayan desvirtuado por la interposición de determinadas excepciones, siempre y cuando se haya actuado prueba, a fin de evitar que el recurso se utilice como un medio de demorar la ejecución de la sentencia mediante la simple proposición de excepciones (muchas veces contradictorias) que nunca se las prueba, como es la práctica forense actual.

Sin embargo, las objeciones doctrinarias respecto de la casación de los fallos dictados en los procesos ejecutivos de ninguna manera han perdido su validez, además, teniendo en cuenta que en nuestra patria los procesos son muy dilatados y los incidentes de toda suerte que suelen provocarse dilatan exageradamente el cumplimiento de las obligaciones, lo que produce un sentimiento generalizado de inseguridad jurídica, impone el meditar que previamente a conceder el recurso extraordinario a las resoluciones dictadas en esta clase de procesos, deba realizarse una reforma a fondo del Código de Procedimiento Civil, a fin de que el juicio ejecutivo sea realmente un juicio de ejecución, y debería pensarse en introducir la figura del juicio monitorio.

Esta reforma deberá ser profundamente meditada; en 1997 se mejoró la utilización del recurso, porque se puso fin a su utilización desviada como instrumento de retardo en la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios



ejecutivos; no convendría dar un paso atrás y volver a la época en que la casación se utilizaba fundamentalmente como instrumento de demora judicial, sin acatar el principio de la buena fe y la lealtad procesal. (90 y ss.)

La Dra. Carmen Romero Ramírez ha realizado un extenso análisis de si cabe o no el recurso de casación en el juicio ejecutivo. Ella establece que en las reformas a la Constitución Política del Estado, publicadas en el Suplemento del Registro Oficial N° 93 de 23 de diciembre de 1992, en su artículo 15, señala: “A continuación del artículo 99 añádase el siguiente: art. ...la Corte Suprema de Justicia actuará como tribunal de casación en todas las materias. Ejercerá además todas las atribuciones que le señalaren la Constitución y la ley...”, reforma que fue introducida en el artículo 102 de la codificación de la Constitución de 1993, publicada en el Registro Oficial N° 183 de 5 de mayo de 1993, dando así nacimiento a la Corte de Casación.

Posteriormente se dicta la ley No. 27, publicada en el Registro Oficial N° 192 de 18 de mayo de 1993, contentiva de la novísima Ley de Casación, que en su artículo 21 derogó expresamente el recurso de tercera instancia, por lo tanto se cristaliza el cambio al transformarse en Corte de tercera instancia a Corte de Casación en todas las materias especializadas. Si bien era cierto que en las materias de lo Penal y Tributaria ya existía este recurso, aun así en esta ley se dispone expresamente que regirá para todas las materias, excepto para la materia penal que se regirá por lo establecido en el Código de Procedimiento Penal. Este cambio significaría que la Corte Suprema se transforme en un ente controlador de la legalidad de las resoluciones emanadas de los jueces de instancia, pero no de todas las resoluciones sino de las determinadas en el artículo 2 de dicha ley.: “Art. 2. Procedencia.- El recurso de casación procede contra:

- a) Las sentencias y los autos que pongan fin a los procesos dictados por las cortes superiores, los tribunales distritales u otros tribunales de apelación.
- b) Las sentencias y los autos que pongan fin a los procesos que no son susceptibles de impugnación por medio del recurso de apelación; y



c) Las providencias que, dictadas para ejecutar sentencias, resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en el fallo, o que lo contradigan.

d) Las providencias que, dictadas para ejecutar sentencias, resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en el fallo, o que contradigan lo ejecutoriado.

Subsiguientemente, se hizo reformas a la Ley de Casación que fueron publicadas en el Registro Oficial No. 39 de 8 de abril de 1997, reformándose básicamente el artículo que se refiere a la procedencia del recurso, y se limitó el mismo solo para los juicios de conocimiento. La *reforma* decía: “Art. 2.- El artículo 2 de la Ley de Casación dirá: Procedencia.- El recurso de casación procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo. Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en el fallo, o contradicen lo ejecutoriado. No procede el recurso de casación de las sentencias o autos dictados por la Corte Nacional de Menores, las Cortes Especiales de las Fuerzas Armadas y la Policía y las resoluciones de los funcionarios administrativos mientras sean dependientes de la Función Ejecutiva”. [...] Esta es la limitación que no permite conocer, mediante recurso de casación, a los juicios ejecutivos.

Así mismo la Doctora Romero establece que, respecto de este punto de derecho las salas especializadas de casación en materia civil, que antes de la promulgación de la Constitución vigente eran tres, han guardado criterios diferentes, que en algún momento generaron fallos contradictorios. Así la Primera y Tercera salas de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia consideraban que no era procedente el recurso de casación en los juicios ejecutivos y consecuentemente no los aceptaban a trámite sin hacer



excepción alguna, conforme constan en varias resoluciones, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema tenía un criterio disímil. [...]

En el caso de las resoluciones dictadas por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, tienen otra óptica jurídica: por regla general no aceptaba el recurso de casación en los juicios ejecutivos, sin embargo hacía las siguientes excepciones:

Por una parte consideraba la sala que hay diferentes títulos de carácter ejecutivo, sin que necesariamente todos ellos puedan dar origen al juicio ejecutivo; así, hay títulos que contienen obligaciones ejecutivas, caracterizadas por ser determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido, al tenor de lo dispuesto en el art. 415 del Código de Procedimiento Civil, y que son las que pueden demandarse en juicio ejecutivo, pues contienen obligaciones de dar cuantificablemente determinadas, como pagarés, cheques, etc..., pero hay otros títulos ejecutivos que no son de ejecución inmediata, que contienen obligaciones de hacer como la confesión, las escrituras públicas, el documento privado reconocido judicialmente, etc... y que necesitan una declaración judicial para que se conviertan en títulos ejecutivos y consecuentemente reclamar su ejecución por la vía ejecutiva. Si el título no tiene esta característica no puede considerarse de ejecución inmediata y por ende tiene que abrirse el paso al juicio de conocimiento. Este es el argumento jurídico que motivó a la sala a aceptar a trámite los juicios ejecutivos que nacían -por ejemplo- de una escritura pública, pues consideraban que no es una cambial que contiene una obligación de carácter autónomo de ejecución inmediata, sino que requiere reconocimiento mediante decisión judicial, lo que le constituye en un proceso de conocimiento. [...]

La Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia también aceptó a trámite los juicios ejecutivos basados en cualquier título ejecutivo en que el demandado se exceptuó en cualquiera de las circunstancias enunciadas en la parte final del inciso primero del artículo 233 de la Ley de Mercado de Valores, que dice:



“Art. 233.- De las características de los valores. Los valores a que se refiere el artículo 2 de esta ley tienen el carácter de títulos valor, en consecuencia incorporan un derecho literal y autónomo que se ejercita por su portador legitimado según la ley, constituyen títulos ejecutivos para los efectos previstos en el artículo 413 del Código de Procedimiento Civil. Se presume, salvo prueba en contrario, su autenticidad, así como la licitud de su causa y la provisión de fondos”.

A su vez el artículo 2 a que se refiere dice: “Art. 2.- Concepto de valor. Para efectos de esta ley, se considera valor al derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente económico, negociables en el mercado de valores, incluyendo, entre otros, acciones, obligaciones, bonos, cédulas, cuotas de fondos de inversión colectivos, contratos de negociación a futuro o a término, permutas financieras, opciones de compra o venta, valores de contenido crediticio de participación y mixto que provengan de procesos de titularización y otros que determine el Consejo Nacional de Valores. Cualquier limitación a la libre negociación y circulación de valores no establecida por ley no surtirá efectos jurídicos y se tendrá por no escrita”

Por tanto, en consideración con los artículos anotados, la sala mencionada tenía el criterio de que si se alegaba falta de licitud, de autenticidad o de provisión de fondos, el proceso era considerado como de conocimiento; así los juicios en los que se propusiera como excepción la falsedad del título se aceptan a trámite, pues a criterio de la sala no se trataba solo de una simple ejecución de un título valor, sino al excepcionarse su falsedad debía decidirse sobre la autenticidad de tal título.

La actual Sala Única de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia acoge los criterios que tenía la ex Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia, y acepta a trámite los juicios ejecutivos que tengan características como las que a continuación se explican:

1) Tener como origen una escritura pública que contenga una obligación de hacer, así se resolvió en el auto de aceptación a trámite dictado dentro del juicio 237-2011, que en su parte pertinente dice: “En la especie, el título



ejecutivo de la escritura pública de promesa de compra venta no es cambial, pagaré, cheque u otro título mercantil que tenga ejecución inmediata, sino que el derecho que estipulan requiere reconocimiento mediante decisión judicial, puesto que no está intrínsecamente manifestada y con el carácter de autónoma la obligación de hacer, exigida por la accionante, en base de dicho documento, constituyendo un proceso de conocimiento, que prevé el art. 2 de la Ley de Casación”.

2) Los juicios ejecutivos basados en cualquier título ejecutivo en los que se propusiera como excepción cualquiera de las tres circunstancias enunciadas en el artículo 233 de la Ley de Mercado de Valores, esto es atacar en ellos su autenticidad, la licitud de su causa y la provisión de fondos, y así lo ha resuelto dentro de los siguientes juicios.[...]

Posteriormente la misma sala dicta sentencia dentro del juicio ejecutivo Nro. 816-2010, en el cual establece que para que proceda o no el recurso de casación en los juicios ejecutivos depende de la excepción que se presentara. Así resuelve lo siguiente:

Qué *No son susceptibles* del recurso extraordinario los juicios en cuya sentencia se resolviera las excepciones de inejecutividad del título y de la obligación porque no producen efecto de cosa juzgada sustancial, ya que pueden volver a litigarse en juicio ordinario.

Por el contrario, sí son susceptibles del recurso extraordinario los fallos que resuelvan sobre las excepciones que traten sobre el derecho material, que contradigan las presunciones de autenticidad del título, la licitud de la causa o la provisión de fondos, excepciones que constan en el artículo 233 de la Ley de Mercado de Valores, pues al resolverse estas excepciones dan paso a un proceso de conocimiento, cuya resolución tiene efecto de cosa juzgada sustancial, que oponen al litigio, extinguen la obligación y no puede volverse a discutir en juicio ordinario. (Romero Ramírez 59 y ss.)



Universidad de Cuenca
Facultad De Jurisprudencia,
Ciencias Políticas Y Sociales

3.8.2. Ejemplos Jurisprudenciales:

Revisar Anexos.



CONCLUSIONES.

1. El juicio ejecutivo es “la resolución del juez o tribunal que hace efectivo lo que consta en un título de forma inmediata” y está regulado a partir del artículo 419 del Código de Procedimiento Civil.
2. El proceso de conocimiento o cognición, es aquel que busca del juez, una **DECLARACIÓN DE VOLUNTAD** sobre una pretensión discutida, lo que hace necesario un juzgamiento contradictorio, con actuaciones probatorias a fin de “transformar los hechos en derecho” y dar la razón al contendiente que efectivamente la tenga.
3. Los procesos de ejecución son aquellos por medio de los cuales se busca no una sentencia o declaración de un derecho, sino una **MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD**, esto es, la actuación del órgano judicial encaminada a la efectivización, materialización o cumplimiento de un acto ya titulado o de un derecho preconstituido.
4. Existen varios medios de impugnación: a) Medios de impugnación dentro de la misma instancia, y b) Medios de impugnación ante otra instancia
5. Dentro de los medios de impugnación, previstos en el ordenamiento jurídico se encuentra el Recurso de Casación relacionados con el derecho privado.
6. El recurso de casación es considerado un medio de impugnación extraordinario contra sentencias de las Salas de las Cortes Provinciales de Justicia, dictadas contra la ley, los trámites sustanciales o la jurisprudencia.
7. La reforma del artículo 2 de la Ley de Casación determina que, el recurso extraordinario de casación procede únicamente en caso de que se dicte una providencia que, ponga fin al proceso, produciendo efecto de cosa juzgada, es decir final y definitiva, dictada por Cortes Superiores, por los tribunales



distritales de los fiscal y de lo contencioso administrativo y que tal providencia se dicte dentro de un *proceso de conocimiento*.

8. En criterio de varios estudiosos, el juicio de ejecutivo no es de ejecución pura, sino que puede convertirse, en ciertos casos, en un proceso de conocimiento, dependiendo de las excepciones que presenten el demandado o accionado. El fallo o resolución que resuelva el conflicto causa efecto de cosa juzgada formal cuando las excepciones resueltas refieran a la inejecutividad del título y de la obligación según el Código de Procedimiento Civil y dará lugar al juicio ordinario como lo establece el artículo 448 del cuerpo legal antes mencionado.

9. Cuando la resolución causa efecto de cosa juzgada sustancial es decir, cuando las excepciones presentadas por el demandado se refieran al derecho material o la autenticidad de los títulos, así como la licitud de su causa y la provisión de fondos según la Ley de Mercado de Valores, en este caso sí procede el recurso de casación.

10. La Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la actual Corte Nacional de Justicia también en algunos casos ha aceptado el Recurso de Casación en juicios ejecutivos, estableciendo que, los juicios ejecutivos no son susceptibles del recurso extraordinario de casación, excepto que tengan como origen una escritura pública cuyo derecho u obligación necesite reconocimiento judicial, o los juicios ejecutivos basados en cualquier título ejecutivo en los que se propusiera como excepción cualquiera de las tres circunstancias enunciadas en el artículo 233 de la Ley de Mercado de Valores, esto es atacar en ellos su autenticidad, la licitud de su causa y la provisión de fondos.

11. Es necesario hacer una reforma legal que determine la procedencia de interponer el recurso de casación en los juicios ejecutivos, dependiendo de las excepciones que proponga el demandado, siempre y cuando el juicio ejecutivo -por las excepciones- se haya transformado en juicio de conocimiento.



12. Aunque no fue materia propuesta para nuestro análisis, debo advertir que el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) el cual entra en vigencia en Mayo del 2016, en su artículo 266 que establece: “Procedencia. El recurso de casación procederá contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento dictados por las Cortes Provinciales de Justicia y por los Tribunales Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo. Igualmente procederá respecto de las providencias expedidas por dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en el proceso ni decididos en el fallo o contradicen lo ejecutoriado”, por lo que no presenta cambios a la actual Ley de Casación.



BIBLIOGRAFIA.

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código de Procedimiento Civil de la República del Ecuador.
- Ley de Casación de la República del Ecuador.
- Código Orgánico General del Procesos de la República del Ecuador.
- Chiovenda, Guiseppe. *Instituciones de Derecho Procesal Civil, tomo 1*. Revista de Derecho Privado. Madrid, España. 1954
- Cueva Carrión, Luis. *La Casación en Materia Civil*. Ediciones Cueva Carrión. Quito, Ecuador. 2011.
- Andrade Ubidia, Santiago. *La Casación Civil en el Ecuador*. Andrade & Asociados Fondo editorial. Quito, Ecuador. 2005.
- Moran Sarmiento, Rubén. *Derecho Procesal Civil Práctico. Tomo I y II*. Guayaquil. Ecuador. Edilex S.A. 2011
- HinostrozaMinguez, Alberto. *Resoluciones Judiciales y Cosa Juzgada*. Jurista editores. Lima, Peru. 2011.
- Batista da Silva, Ovídio A. *Jurisdicción y ejecución en la tradición Romana-Canonica*. Palestra Editores. Lima, Perú. 2005
- Tarruffo, Michele. *El Vertice Ambiguo, ensayos sobre la casación civil*. Palestra Editores. Lima, Perú. 2006
- Vescovi, Enrique. *Los Recurso Judiciales y demás medios Impugnativos en Iberoamérica*. Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1988.
- Memorias del Primer Seminario Internacional. *El Recurso de Casacion en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia*. Gaceta Judicial. Quito, Ecuador. 2013.
- Machuca Bravo, Káiser. *Sumarios de Materia de La Carrera de Derecho de la Universidad Estatal de Cuenca*. Cuenca, Ecuador. 2015.
- Quevedo, René. *La Casación en el Juicio Ejecutivo*. Internet. www.es.scribd.com. Acceso: 28 de febrero de 2015.



- RESOLUCIÓN 068-2013-ST. Internet. www.cortenacional.gob.ec. Acceso: 5 de marzo de 2015
- RESOLUCIÓN 600-2010-ST. Internet. www.cortenacional.gob.ec. Acceso: 28 de julio de 2015
- Romero Ramírez, Carmen. Recuso de Casación en los Juicios Ejecutivos. Internet. www.derechoecuador.com. Acceso 10 de marzo de 2015
- Cabanellas, Guillermo. *Diccionario Jurídico Elemental*. Edit. Heliasta. Argentina. 2011
- Chiovenda, José. *Derecho Procesal Civil*. Tomo I. México. Cárdenas. Editor. 1989.
- Valencia-Grajales. *Casación en Colombia*. Internet. www.abogados-exitosos.blogspot.com Acceso: 1 de marzo de 2015.
- Torres Álvarez, Néstor. *Juicio Ejecutivo*. Internet. www.monografias.com. Acceso: 2 de marzo de 2015.
- Diccionario de la Real Academia de la Lengua española. 2011.
- Calderón Olaya, Fernando. *Particularidades del título ejecutivo como género y el título valor como especie. Parte III*. Internet. www.gerencie.com. Acceso: 8 de abril de 2015
- Jiron Coronel, Marco. *Legislación Mercantil y Societaria*. Internet. www.slideshare.net. Acceso: 23 de agosto de 2015.
- Fairén Guillén, Víctor. *Teoría General Del Derecho Procesal*. Internet. www.biblio.juridicas.unam.mx. Acceso: 13 de julio de 2015
- Santaella, Carla. *Medios de Impugnación*. Internet. www.monografias.com. Acceso: 27 de agosto de 2015.
- Rioja Bermudez, Alexander. *Procesal Civil*. Internet. www.blog.pucp.edu.pe. Acceso: 23 de junio de 2015
- Enciclopedia Juridica. *Título Ejecutivo*. Internet. www.encyclopedia-juridica.biz14.com. Acceso: 26 de Agosto de 2015



Universidad de Cuenca
Facultad De Jurisprudencia,
Ciencias Políticas Y Sociales

ANEXOS.